



NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1008
E/CN.4/Sub.2/305
4 noviembre 1969
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección
a las Minorías

INFORME DE LA SUBCOMISION DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIONES Y
PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE SU 22.º PERIODO DE SESIONES

Nueva York, 25 de agosto a 12 de septiembre de 1969

Relator: Sr. Antonio MARTINEZ BAEZ

Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

69-25620

/...

INDICE

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES	1 - 21	4
Apertura y duración del período de sesiones	1 - 2	4
Asistencia	3 - 11	4
Elección de la Mesa	12	7
Secretaría	13	7
Programa	14	8
Organización de los trabajos	15	8
Sesiones, resoluciones y documentación	16 - 21	9
II. ESTUDIO ESPECIAL DE LA DISCRIMINACION RACIAL EN LAS ESFERAS POLITICA, ECONOMICA, SOCIAL Y CULTURAL	22 - 45	10
Aprobación de la resolución	44	18
<u>Resolución 2 (XXII)</u> de 5 de septiembre de 1969	45	20
III. ESTUDIO DE LA IGUALDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	46 - 202	21
Introducción	46 - 54	21
Examen del informe en su conjunto	55 - 62	23
Examen del proyecto de principios	63 - 141	24
Presentación del proyecto revisado de principios (E/CN.4/Sub.2/L.523 y Corr.1)	142 - 190	42
Examen del proyecto de resolución	191 - 198	53
Aprobación de la resolución	199 - 201	62
<u>Resolución 3 (XXII)</u> de 9 de septiembre de 1969	202	62
IV. CUESTION DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE ESCLAVOS EN TODAS SUS PRACTICAS Y MANIFESTACIONES, INCLUIDAS LAS PRACTICAS ESCLAVIZADORAS DEL <u>APARTHEID</u> Y DEL COLONIALISMO	203 - 223	64
Aprobación de la resolución	218 - 222	68
<u>Resolución 4 (XXII)</u> de 10 de septiembre de 1969	223	70

/...

INDICE (continuación)

<u>Capítulo</u>	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
V. CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, INCLUSO LAS POLITICAS DE DISCRIMINACION RACIAL Y SEGREGACION Y DE <u>APARTHEID</u> , EN TODOS LOS PAISES Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES	224 - 233	72
VI. EXAMEN DE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN ESFERAS DE QUE SE HA CCUPADO LA SUBCOMISION	234 - 259	81
Aprobación de la resolución	258	90
<u>Resolución 1 (XXII)</u> de 28 de agosto de 1969	259	91
VII. APROBACION DEL INFORME DE LA SUBCCMISION A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	260	94
VIII. PROYECTO DE RESOLUCION CUYA APROBACION SE RECOMIENDA A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS		95
Estudio de la igualdad en la administración de justicia		95

ANEXOS

- I. CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA SUBCOMISION EN SU 22.º PERIODO DE SESIONES
- II. LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SUBCOMISION EN SU 22.º PERIODO DE SESIONES

/...

I. ORGANIZACION DEL PERIODO DE SESIONES

Apertura y duración del período de sesiones

1. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su 22.^o período de sesiones en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, del 25 de agosto al 12 de septiembre de 1969.
2. Declaró abierto el período de sesiones (557a. sesión) el Sr. Pierre Juvigny, (Francia), Presidente de la Subcomisión en el 21.^o período de sesiones.

Asistencia

3. Asistieron al período de sesiones los siguientes miembros titulares y suplentes:

Sr. Mohammed A. Abu Rannat	(Sudán)
Sr. Alexander Bolintineanu	(Rumania)
Sr. Peter Calvocoressi Sr. Derek Milton (suplente)	(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. Francesco Capotorti	(Italia)
Sr. John Carey (suplente del Sr. Clyde Ferguson, Jr.) Sr. George Thomas (suplente)	(Estados Unidos de América)
Sr. Adib Daoudy	(Siria)
Sr. Vicente Díaz Samoyoa	(Guatemala)
Sr. I.J.D. Durlong	(Nigeria)
Srta. Mary M. Gichuru	(Kenia)
Sr. Héctor Gros Espiell	(Uruguay)
Sr. John P. Humphrey	(Canadá)
Sr. José D. Inglés Sr. Alejandro D. Yando (suplente)	(Filipinas)
Sr. Branimir Jankovic	(Yugoslavia)
Sr. Pierre Juvigny	(Francia)

/...

Sr. Ahmed Kettani	(Marruecos)
Sr. Ahmed Khalifa	(República Árabe Unida)
Sr. A. Monssa (suplente)	
Sr. Antonio Martínez Báez	(México)
Sr. José R. Martínez Cobo	(Ecuador)
Sr. Erik Nettel	(Austria)
Sr. Gregor Woschnagg (suplente)	
Sr. Paul Nikiema	(Alto Volta)
Sr. Reaz Rahman (suplente del Sr. A.R. Cornelius)	(Paquistán)
Sr. Nicodème Ruhashyankiko	(Rwanda)
Sr. U.M. Rybakov	(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
Sr. G.I. Ragulin (suplente)	
Sr. Hernán Santa Cruz	(Chile)
Sr. José Piñera (suplente)	
Sr. W.E. Waldron-Ramsey	(República Unida de Tanzania)

4. El Sr. A.R. Cornelius (Paquistán) y el Sr. Clyde Ferguson, Jr. (Estados Unidos de América) designaron al Sr. Reaz Rahman y al Sr. John Carey respectivamente como suplentes para todo el período de sesiones. El Sr. Peter Calvocoressi, el Sr. José D. Inglés, el Sr. Ahmed Khalifa, el Sr. Erik Nettel, el Sr. U.M. Rybakov y el Sr. Hernán Santa Cruz designaron como suplentes para algunas sesiones al Sr. Derek Milton, al Sr. Alejandro D. Yango, al Sr. A. Moussa, al Sr. Gregor Woschnagg, al Sr. G.I. Ragulin y al Sr. José Piñera, respectivamente. El Sr. Carey designó al Sr. George Thomas como suplente. El Secretario General se manifestó plenamente de acuerdo con estas designaciones y, en consecuencia, los suplentes gozaron durante el período de sesiones de los mismos derechos que los miembros de la Subcomisión, inclusive el derecho a voto.

5. Al Sr. Simmon Ilako (República Democrática del Congo) le fue imposible asistir al período de sesiones.

6. El Sr. Mohamed Awad asistió al período de sesiones en su calidad de Relator Especial sobre la esclavitud.

7. Los siguientes Estados Miembros estuvieron representados por observadores:

Irak

Sr. Mohamed Ridha al-Jabiri

Israel

Sr. Shamay Cahana

8. De conformidad con la resolución 48 (IV) del Consejo Económico y Social, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer estuvo representada en el período de sesiones por la Sra. Eugenia A. Stevenson.
9. Los siguientes organismos especializados estuvieron representados en el período de sesiones del modo siguiente:

Organización Internacional del Trabajo (OIT): Sr. William Knight
Srta. Delia García-Daireaux

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Srta. Lorna Mcphee

10. La Liga de los Estados Arabes estuvo representada en el período de sesiones por los observadores siguientes: Sr. Rashad Mourad, Sr. Burhan Hammad y Sr. Mohamed M. Fahmy.

11. Las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas estuvieron representadas del modo siguiente:

Categoría I

Consejo Internacional de Mujeres: Sra. Sylvester Carter

Categoría II

Asociación Cristiana Femenina Mundial: Sra. Margaret Gordon Forsyth
Mildred F.H. Jones

Asociación Femenina del Pacífico y
Sudeste de Asia: Sr. Leah Horwitz

Comité de Coordinación de Organizaciones
Judías: Sr. H. Schoenberg

Comité Mundial de la Sociedad de los Amigos: Sr. Cecil R. Avans

Conferencia Internacional Católica de Caridad: Sr. Louis Longarzo

Congreso Islámico Mundial: Sr. Issa Nakhley

Congreso Judío Mundial Sr. Maurice L. Perlzweig

Consejo Consultivo de Organizaciones Judías: Sr. Moses Moskowitz

Consejo Internacional de Mujeres Judías: Nettie S. Levy
Sra. Helene K. Plant

/...

Categoría II (continuación)

Federación Internacional de Mujeres
Profesionales y de Negocios:

Esther W. Hymer

Federación Internacional de Abogadas:

Dora Alberlin
Clennie C. Baker
Ida M. Greenblatt
Srta. Anna R. Kumin
Wilhelmina C. Montour

Federación Internacional pro Derechos del
Hombre:

Srta. Roberta Cohen

Liga contra la Esclavitud:

Sr. Patrick Montgomery

Liga Internacional de los Derechos del Hombre:

Sra. Dora Roitburd

Organización Mundial Agudas Israel:

Sr. Isaac Lewin

Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas:

Srta. Catherine Schaefer
Margaret Stokes
Alba Zizzamia

Lista

Unión Internacional del Humanismo y la Etica:

Sra. Walter M. Weiss

Elección de la Mesa

12. En su 557a. sesión, la Subcomisión eligió la siguiente Mesa:

Presidente:

Sr. Mohammed Abu Rannat (Sudán)

Vicepresidentes:

Sr. Alexander Bolintineanu (Rumania)
Sr. John P. Humphrey (Canadá)

Relator:

Sr. Antonio Martínez Báez (México)

Secretaría

13. El Sr. Marc Schreiber, Director de la División de Derechos Humanos, y el Sr. Edward Lawson, Director Adjunto de la misma, representaron al Secretario General. El Sr. George Brand y el Sr. Rupert John se desempeñaron como Secretarios de la Subcomisión.

/...

Programa

14. En su 557a. sesión, la Subcomisión aprobó, como programa de su 22.º período de sesiones, los siguientes temas del programa provisional (E/CN.4/Sub.2/295):

1. Elección de la Mesa
2. Aprobación del programa
3. Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural
4. Estudio de la igualdad en la administración de la justicia
5. Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo
6. Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes
7. Comunicaciones relativas a los derechos humanos
8. Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión
9. Protección a las minorías
10. Genocidio
11. Examen de la labor futura de la Subcomisión
12. Informe de la Subcomisión a la Comisión de Derechos Humanos sobre su 22.º período de sesiones.

Organización de los trabajos

15. La Subcomisión examinó ciertos temas de su programa en el siguiente orden: 8, 4, 3, 5 y 6. El examen de estos temas ocupó todo el período de sesiones. La Subcomisión aplazó la consideración de los temas 7, 9, 10 y 11 hasta su 23.º período de sesiones. En relación con el tema 7 (Comunicaciones relativas a los derechos humanos), la Subcomisión tuvo ante sí: a) una lista confidencial de comunicaciones (H.R. Communications Nos. 19/Add.1-4 y H.R. Communications No. 20) y las respuestas de los gobiernos (H.R. Communications Nos. 648-741); b) una lista no confidencial

/...

de comunicaciones (E/CN.4/Sub.2/CR.14); c) el informe del Grupo de Trabajo designado en virtud de la resolución 2 (XXI) de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/R.1); y d) un proyecto de resolución presentado por el Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.536). En relación con el tema 9 del programa (Protección a las minorías) la Subcomisión tuvo ante sí un proyecto de resolución presentado por los Sres. Kettani, Khalifa, y Waldron-Ramsey (E/CN.4/Sub.2/L.534) y un proyecto de resolución presentado por los Sres. Díaz Samayoa y Gros Espiell (E/CN.4/Sub.2/L.535). En relación con el tema 10 del programa (Genocidio), la Subcomisión tuvo ante sí una nota del Secretario General sobre la situación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (E/CN.4/Sub.2/302) y una nota del Secretario General en la que figuraba la información recibida de los gobiernos en respuesta al pedido de información que se les hiciera de conformidad con la resolución 1420 (XLVI) del Consejo Económico y Social (E/CN.4/Sub.2/303 y Add.1-6). En relación con el tema 11 (Examen de la labor futura de la Subcomisión) la Subcomisión tuvo ante sí una nota del Secretario General (E/CN.4/Sub.2/L.530).

Sesiones, resoluciones y documentación

16. La Subcomisión celebró 25 sesiones plenarias. Las opiniones expuestas en esas sesiones se resumen en las actas de las sesiones 557a. a 581a. (E/CN.4/Sub.2/SR.557 a 581).
17. En su 558a. sesión, la Subcomisión escuchó declaraciones de los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
18. La Subcomisión aprobó las resoluciones 1 (XXII) a 4 (XXII). Los textos de dichas resoluciones se reproducen más adelante bajo los epígrafes correspondientes.
19. Los proyectos de resolución cuya aprobación se recomienda a la Comisión de Derechos Humanos figuran en el capítulo VIII.
20. En el anexo I se reproducen las exposiciones preparadas por el Secretario General sobre las consecuencias financieras de las resoluciones 2 (XXII), 3 (XXII) y 4 (XXII).
21. La lista de los documentos que la Subcomisión tuvo a la vista figura en el anexo II.

/...

II. ESTUDIO ESPECIAL DE LA DISCRIMINACION RACIAL EN LAS ESFERAS POLITICA, ECONCMICA, SOCIAL Y CULTURAL

(Tema 3 del programa)

22. En sus sesiones 565a. a 572a., la Subcomisión examinó el tema 3 de su programa.

23. La Subcomisión tuvo ante sí un informe provisional (E/CN.4/Sub.2/301) presentado por el Relator Especial, Sr. Hernán Santa Cruz. Al presentar su informe, el Relator Especial señaló a la atención la resolución 6 (XXI), aprobada por la Subcomisión en su 21.^o período de sesiones, en la que la Subcomisión lo había invitado a que, teniendo en cuenta el intercambio de opiniones habido en ese período de sesiones, presentara un informe definitivo con tiempo suficiente para que pudiera ser examinado por la Subcomisión en su 22.^o período de sesiones. Como la Subcomisión podía darse cuenta, el Relator Especial no había cumplido esa solicitud en su totalidad y había presentado un informe no definitivo sino provisional. El Relator Especial dijo que eso se debía a las razones de fondo que había señalado en los párrafos 26 y 27 del informe provisional. A su parecer, la comunidad internacional daba cada vez más importancia al problema de la discriminación racial, lo cual era, en su opinión, la principal preocupación de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. Por consiguiente, era imperativo que su estudio fuera lo más amplio y detallado posible. Le parecía que ese objetivo se podía alcanzar siempre que pudiera basar su informe definitivo en no menos de ochenta documentos de sesión en lugar de los escasos treinta y seis en que se basaba el informe provisional.

24. Al referirse al capítulo sobre el peligro de resurgimiento del nazismo y la intolerancia racial, el Relator Especial recordó que en el 21.^o período de sesiones de la Subcomisión había declarado que el capítulo que había preparado entonces sobre el tema era incompleto y que estudiaría la posibilidad de reorganizar la totalidad del capítulo en el informe definitivo. Desde entonces se habían producido nuevos acontecimientos. Por ejemplo, en su resolución 10 (XXV), la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Subcomisión que en el estudio incluyera lo relativo al peligro del renacimiento del nazismo y la forma en que podía afectar la vigencia y protección de los derechos y libertades fundamentales. La Comisión invitó también a los gobiernos de los Estados Miembros que poseyeran información sobre la cuestión a que la hicieran llegar al Relator Especial con tiempo para ser tenidas en consideración en su estudio. Asimismo, en la resolución 2433 (XXIII) de la Asamblea General, se

/...

había pedido al Secretario General que presentara un resumen de la información que estuviera a su disposición en materia de instrumentos internacionales, legislación y otras medidas adoptadas o previstas tanto en el plano nacional como en el internacional para hacer cesar las actividades racistas, nazistas y de índole análoga, como el apartheid. Por estas razones, el Relator Especial había decidido aplazar la presentación de su informe definitivo hasta el 23.^o período de sesiones de la Subcomisión.

25. En relación con la estructura del informe provisional, el Relator Especial señaló que, como resultado del debate del 21.^o período de sesiones de la Subcomisión, había introducido una serie de modificaciones. El informe provisional consistía en una introducción y once capítulos. El texto del capítulo I, relativo a los antecedentes históricos de la discriminación racial se había vuelto a redactar en su totalidad. En el capítulo II se definía el alcance del estudio. El capítulo III, que correspondía al capítulo VIII del proyecto de informe, había sido revisado a fondo a la luz de las monografías nacionales adicionales puestas a disposición del Relator Especial. En los capítulos IV, V, VI y VII se analizaba la situación actual de diversas partes del mundo en cuanto a la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural, principalmente sobre la base de la información de los documentos de sesión terminados después de la preparación del proyecto de informe. El capítulo VIII versaba sobre una nueva cuestión que no figuraba en el proyecto de informe, a saber, las medidas adoptadas en relación con la protección de los pueblos indígenas o autóctonos, y el Relator Especial informó a la Subcomisión que en su informe definitivo habría un capítulo completo sobre el trato dado a los pueblos indígenas. En el capítulo IX, que se ocupaba de la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica, se reproducía esencialmente el capítulo IX del proyecto de informe, junto con información sobre nuevos acontecimientos ocurridos después de la preparación de ese informe. En el capítulo XI figuraban proyectos de propuestas y de recomendaciones, revisados a la luz del debate del 21.^o período de sesiones de la Subcomisión. En relación con el capítulo X, que trataba de la cuestión del nazismo, el Relator Especial dijo que seguía pensando que el capítulo era provisional todavía y señaló a la atención el párrafo 656 de su informe, en el que indicaba que las conclusiones que figuraban en el proyecto de informe se habían mantenido por el momento, pero subrayaba que

/...

según siendo de carácter provisional. Tanto el capítulo como sus conclusiones sólo podían alcanzar su forma definitiva cuando se dispusiera de información enviada por los gobiernos.

26. Hicieron comentarios diversos miembros de la Subcomisión, observadores de los Gobiernos de Israel e Irak, el representante de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y los observadores del Congreso Judío Mundial, del Congreso Islámico Mundial y de la Organización Mundial Agudas Israel. El Relator Especial fue felicitado calurosamente por su informe y se mencionó su erudición, objetividad, amplitud, equilibrio y exactitud. A continuación se resumen algunas de las cuestiones planteadas en el debate sobre el informe.

27. Todos los oradores opinaron que las ideologías y prácticas racistas y nazis eran incompatibles con el desarrollo de la sociedad humana en una época en que la ciencia, la civilización y la cultura hacían avances considerables. En algunas intervenciones se indicó que, por analizar los aspectos más importantes de la discriminación racial e indicar maneras de combatirlos, el estudio del Relator Especial constituía un valioso aporte a la eliminación de la amenaza que suponía la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, incluida la segregación racial, el apartheid y el nazismo para los valores fundamentales de la humanidad.

28. Varios miembros manifestaron beneplácito por el capítulo I, sobre los antecedentes históricos de la discriminación racial. A su parecer representaba una evaluación muy satisfactoria de los orígenes de la discriminación racial, examinaba adecuadamente las dos consideraciones principales, a saber, el colonialismo y la esclavitud e indicaba claramente cómo habían cambiado la opinión pública y el derecho internacional con el transcurso del tiempo. Sin embargo, algunos miembros estimaron que el capítulo dedicaba un considerable espacio a opiniones teóricas pero que quizás no contaba con suficiente información práctica sobre las circunstancias históricas del desarrollo del racismo. En su respuesta, el Relator Especial indicó que tendría presentes los útiles comentarios formulados y que en su informe definitivo incluiría material acerca de la influencia de las actuales modalidades de la discriminación racial sobre el proceso de desarrollo económico y social y del concepto de discriminación racial como instrumento de explotación.

/...

29. Hubo un largo debate sobre el capítulo X, que se ocupaba del peligro del resurgimiento del nazismo y la intolerancia racial. Algunos miembros expresaron su profunda inquietud por lo que consideraban indicios del resurgimiento de las actividades nazis en ciertas partes del mundo, sobre todo en la República Federal de Alemania en donde se dijo que había organizaciones y asociaciones que difundían el racismo, el militarismo e ideas revanchistas. En opinión de esos miembros, el Partido Nacional Democrático de la República Federal de Alemania era el núcleo en torno del cual se habían reagrupado los que propugnaban el fascismo y la continuación del ex partido nazi. Estimaron que el partido representaba el ejemplo más peligroso del resurgimiento del nazismo. Deploraron enérgicamente que algunos gobiernos tolerasen la existencia de organizaciones nazis y las actividades que llevaban a cabo esas organizaciones, cuando las Naciones Unidas habían pedido a los gobiernos que prohibiesen los partidos y organizaciones nazis. Por otro lado, se expresó la opinión de que si bien el nazismo era la peor expresión del fascismo europeo, no era su único aspecto y que, en realidad, constituía sólo un elemento de un fenómeno más amplio. Los que compartían este parecer opinaron que era difícil ser objetivos cuando entraban en juego muy de cerca las emociones y que debía establecerse una distinción entre el pasado y el presente e incluso el futuro del nazismo.

30. Algunos miembros pusieron en duda la conveniencia de basarse tanto en el informe sobre el juicio del Tribunal Militar Internacional establecido en Nuremberg a fin de demostrar la esencia del nazismo. Estimaron que sería preferible aducir pruebas de origen posterior tomadas de fuentes diferentes. También era su opinión que habría sido preferible que el Relator Especial diera su propia interpretación de los hechos en vez de reproducir extensas citas de dicho juicio. Sin embargo, otros miembros opinaron que las citas servían para poner de relieve la inequívoca atrocidad del nazismo, cuyas faltas no debían encubrirse. Un miembro hizo notar que el capítulo sobre el nazismo se ocupaba principalmente del problema en la República Federal de Alemania, pero que, en beneficio de un tratamiento equilibrado, podía hacerse referencia también a la situación en la Alemania oriental. Sin embargo, otro miembro de la Subcomisión hizo notar que la República Democrática Alemana había sabido eliminar totalmente la ideología y la práctica del nazismo y que no existía en dicho país ningún partido ni organización que pudiera propagar las ideas

/...

inhumanas del nazismo. En su respuesta, el Relator Especial señaló que el capítulo relativo al nazismo había sido presentado como texto provisional y que sería objeto de una extensa revisión a la luz de los comentarios y sugerencias hechos por los miembros de la Subcomisión y del material adicional que esperaba recibir de los gobiernos. El Relator Especial declaró que en el informe había de hacerse una descripción no sólo de los elementos racistas del nazismo en el pasado sino también de cualquier fenómeno actual pertinente, ya fuera en la República Federal de Alemania o en cualquier otra parte.

31. Varios miembros hicieron comentarios favorables sobre la descripción de la política racial de la República de Sudáfrica que se hacía en el capítulo IX del informe. Sin embargo, se sugirió que la documentación preparada por el Grupo Especial de Expertos constituido en virtud de la resolución 2 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos podía utilizarse de manera más cabal para ampliar el alcance del estudio. Un miembro opinó que podía prestarse mayor atención a las razones del fracaso de las medidas internacionales que se habían adoptado para combatir el apartheid. Se sugirió asimismo que las políticas raciales de Rhodesia del Sur, Namibia y de los territorios bajo dominación portuguesa podían considerarse en el estudio dentro del contexto del apartheid. El Relator Especial dijo que tomaría en cuenta esas sugerencias al preparar su informe definitivo.

32. Se expresó aprecio por el hecho de que en el informe se hubiera incluido el capítulo sobre las medidas adoptadas en relación con la protección de los pueblos indígenas. Varios miembros también hicieron suya la intención, expresada por el Relator Especial, de incluir en el informe definitivo un capítulo especial sobre el tratamiento dado a los pueblos indígenas. Sin embargo, se opinó que el capítulo existente sería más útil si contuviera más información objetiva sobre las condiciones actuales en oposición a la legislación.

33. Con ciertas reservas, hubo acuerdo general en principio sobre las conclusiones y propuestas generales incluidas por el Relator Especial en el capítulo XI del informe. En lo que respecta a la afirmación que se hace en la segunda parte del párrafo 755 relativa a la posición de las poblaciones autóctonas de algunos países de América Latina, algunos miembros de la Subcomisión sugirieron que la frase podía redactarse de nuevo en particular para que quedase bien claro que no se establecía ninguna comparación ni histórica ni actual, entre la posición de las poblaciones

/...

autóctonas de América Latina y la de la población de Sudáfrica que vivía bajo el régimen del apartheid. En su contestación, el Relator Especial declaró que en el párrafo no se trataba en modo alguno de comparar la situación en América Latina con el apartheid. Señaló que la discriminación racial adoptaba muchas formas, figurando en un extremo el apartheid, tal como lo aplicaba el Gobierno de la República de Sudáfrica, y en el otro, una forma más sutil que podía equivaler a una distinción de clases, como la que se aplicaba a las poblaciones indígenas de América Latina.

34. Varios miembros hicieron diversas sugerencias sobre los modos en que se podía mejorar la estructura del informe. El Relator Especial prometió tomar en consideración esas observaciones y comentarios al preparar su informe definitivo.

35. En la 571a. sesión, el Sr. Calvocoressi, el Sr. Martínez Baéz y el Sr. Waldron-Ramsey presentaron un proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.521), que decía lo siguiente:

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Habiendo examinado el informe provisional (E/CN.4/Sub.2/301) sobre el estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural presentado por el Relator Especial, Sr. Hernán Santa Cruz,

"1. Expresa su sincero reconocimiento al Sr. Hernán Santa Cruz por su amplio y valioso informe, que representa un nuevo adelanto en la labor de la Comisión en esta materia;

"2. Pide al Relator Especial que continúe su tarea, teniendo en cuenta el intercambio de opiniones sobre el informe que ha tenido lugar en el 22.º período de sesiones de la Subcomisión, y que prepare y presente un informe definitivo a tiempo para que la Subcomisión lo considere en su 23.º período de sesiones."

36. En la misma sesión, el Sr. Rybakov presentó las siguientes enmiendas (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1) al proyecto de resolución:

"Párrafo 1

"1. Al final del párrafo, añádanse las siguientes palabras:

"y aprueba el enfoque que se da en el informe a los problemas considerados."

/...

"Párrafo 2 y nuevos párrafos

"2. Reemplácese el párrafo 2 por los nuevos párrafos siguientes:

"2. Pide al Relator Especial que complete su informe con materiales sobre el renacimiento del nazismo en las circunstancias contemporáneas, la relación del nazismo actual con las fuerzas racistas en diferentes regiones del mundo, la nefasta influencia del nazismo en la juventud, así como sobre el apoyo financiero prestado a las organizaciones nazistas;

"3. Pide al Relator Especial que prepare recomendaciones sobre las medidas efectivas que deben tomarse contra la discriminación racial y el nazismo;

"4. Pide al Secretario General que preste al Relator Especial todo el apoyo necesario para que concluya su informe y, en particular, que tome medidas para que los materiales solicitados a los gobiernos, de conformidad con la resolución 10 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, se presenten y entreguen oportunamente al Relator Especial;

"5. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que presente el informe provisional (E/CN.4/Sub.2/301), preparado por el Relator Especial, Sr. Santa Cruz, a los Estados Miembros antes del comienzo del vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, para su utilización en el curso del período de sesiones;

"6. Pide al Relator Especial que presente oportunamente el estudio final para que la Subcomisión lo estudie en su 23^o período de sesiones y decide conceder prioridad a la consideración de este tema en dicho período de sesiones."

37. Al presentar el proyecto de resolución E/CN.4/Sub.2/L.521, el Sr. Calvocoressi declaró que hablaba sólo a título personal y no en nombre de los copatrocinadores del proyecto de resolución. A su juicio, el proyecto de resolución era breve y preciso y seguía el modelo de las resoluciones aprobadas con respecto a otros estudios realizados por la Subcomisión. En cuanto a las enmiendas propuestas por el Sr. Rybakov, no tenía objeciones respecto de la mayoría de ellas en cuanto al fondo, pero creía que no eran necesarias, especialmente cuando su propósito era dar instrucciones al Relator Especial. Además, no podía apoyar la propuesta de presentar el informe a la Asamblea General en su estado actual. Otros miembros expresaron opiniones análogas. También se dijo que, de todos modos, el informe provisional estaría a disposición de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y, por consiguiente, era innecesario incluir en la resolución un párrafo para confirmar ese hecho.

38. Al explicar las enmiendas que había propuesto, el Sr. Rybakov manifestó que reforzarían el proyecto de resolución. El orador estimó que el nuevo párrafo 2 de la parte dispositiva sería una ayuda para el Relator Especial al tratar la cuestión del nazismo en su informe definitivo, y estaba en consonancia con resoluciones aprobadas por órganos superiores de las Naciones Unidas, como la resolución 2438 (XXIII) de la Asamblea General y la resolución 1417 (XLVI) del Consejo Económico y Social. En cuanto a la propuesta de presentar el informe provisional a la Asamblea General, el Sr. Rybakov consideró que el informe si bien no era definitivo, contenía información valiosa que podía ser utilizada por ese órgano en su forma actual.

Ciertos miembros apoyaron este criterio, que fue puesto en duda por otros.

39. En la 572a. sesión, el Sr. Khalifa presentó las siguientes enmiendas (E/CN.4/Sub.2/L.524) a las enmiendas del Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1):

"Párrafo 2

"Al final del párrafo, agréguense las palabras que siguen:

"y que incluya en el mismo un examen de todas las ideologías análogas que se basan en la intolerancia racial."

"Párrafo 3

"Al final del párrafo, agréguense las palabras que siguen:

"y todas las demás ideologías análogas."

40. El Sr. Rybakov aceptó estas enmiendas, así como una enmienda oral del Sr. Khalifa encaminada a suprimir en el párrafo 2 de la parte dispositiva de sus enmiendas las siguientes palabras: "la nefasta influencia del nazismo en la juventud, así como sobre el apoyo financiero prestado a las organizaciones nazistas". También aceptó la propuesta oral del Sr. Kettani de añadir, al final de su enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva, las palabras "teniendo en cuenta el intercambio de opiniones que ha tenido lugar en el 22.º período de sesiones de la Subcomisión".

41. A propuesta de algunos miembros, el Sr. Rybakov suprimió la palabra "efectivas" después de la palabra "medidas" en el párrafo 3 de la parte dispositiva. También modificó el párrafo 4 de la parte dispositiva añadiendo "nuevamente" después de "Pide" en la primera línea, y sustituyendo a la segunda y tercera línea "tome medidas para que los materiales solicitados" por "pida nuevamente a los Estados que

se aseguren de que la información solicitada". A la luz de la discusión el Sr. Rybakov retiró el párrafo 5 de la parte dispositiva de su enmienda. El Sr. Ribakov retiró el párrafo 6 de la parte dispositiva de su enmienda en favor del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.521), añadiendo las palabras "con prioridad" después de "considere".

42. En la misma sesión el Sr. Jankovic propuso verbalmente el nuevo párrafo siguiente para que se incluyera a continuación del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución:

"Invita al Relator Especial a completar su informe con datos sobre características y manifestaciones de la política de segregación en toda el Africa meridional: en Rhodesia del Sur, en Namibia y en los territorios bajo dominación portuguesa;"

43. El representante del Secretario General señaló a la atención de la Subcomisión el documento E/CN.4/Sub.2/L.522, que contenía la exposición de las consecuencias financieras del proyecto de resolución que figuraba en el documento E/CN.4/Sub.2/L.521 formulada por el Secretario General.

Aprobación de la resolución

44. En su 572a. sesión, la Subcomisión votó sobre el proyecto de resolución presentado por el Sr. Calvocoressi, el Sr. Martínez Báez y el Sr. Waldron-Ramsey (E/CN.4/Sub.2/L.521) y las enmiendas al mismo de la siguiente manera:

- a) Por unanimidad quedó aprobado el considerando.
- b) Por 15 votos contra 1 y 8 abstenciones, quedó aprobada la enmienda oral del Sr. Rybakov al párrafo 1 de la parte dispositiva.
- c) Por 17 votos contra ninguno y 8 abstenciones, quedó aprobado el párrafo 1 de la parte dispositiva en su totalidad en su forma enmendada.
- d) Por 24 votos contra 1, quedó aprobada en votación nominal la enmienda oral del Sr. Jankovic. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Sr. Abu Rannat, Sr. Bolintineanu, Sr. Calvocoressi, Sr. Capotorti, Sr. Carey, Sr. Daoudy, Sr. Durlong, Srta. Gichuru, Sr. Gros Espiell, Sr. Humphrey, Sr. Jankovic, Sr. Juvigny, Sr. Kettani, Sr. Khalifa, Sr. Martínez Báez, Sr. Martínez Cobo, Sr. Nettel, Sr. Nikiema, Sr. Rahman, Sr. Ruhashynkiko, Sr. Piñera, Sr. Ribakov, Sr. Waldron-Ramsey y Sr. Yango.

Votos en contra: Sr. Díaz Samayoa.

/...

e) Por 16 votos contra 6 y 2 abstenciones, quedó aprobado en votación nominal el párrafo 2 de la parte dispositiva de la enmienda del Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1) en su forma enmendada. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Sr. Abu Rannat, Sr. Bolintineanu, Sr. Daoudy, Sr. Durlong, Sr. Gichuru, Sr. Gros Espiell, Sr. Humphrey, Sr. Jankovic, Sr. Kettani, Sr. Khalifa, Sr. Nettel, Sr. Rahman, Sr. Ruhashyankiko, Sr. Piñera, Sr. Rubakov y Sr. Waldron-Ramsey.

Votos en contra: Sr. Calvocoressi, Sr. Capotorti, Sr. Carey, Sr. Díaz Samaya, Sr. Martínez Báez y Sr. Martínez Cobo.

Abstenciones: Sr. Juvigny y Sr. Yango.

f) Por 17 votos contra ninguno y 8 abstenciones, quedó aprobado en votación nominal, el párrafo 3 de la parte dispositiva de la enmienda del Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1) en su forma enmendada. La votación fue como sigue:

Votos a favor: Sr. Abu Rannat, Sr. Bolintineanu, Sr. Capotorti, Sr. Daoudy, Sr. Durlong, Srta. Gichuru, Sr. Humphrey, Sr. Jankovic, Sr. Juvigny, Sr. Kettani, Sr. Khalifa, Sr. Nettel, Sr. Nikiema, Sr. Piñera, Sr. Rahman, Sr. Rybakov y Sr. Waldron-Ramsey.

Votos en contra: Ninguno.

Abstenciones: Sr. Calvocoressi, Sr. Carey, Sr. Díaz Samaya, Sr. Gros Espiell, Sr. Martínez Báez, Sr. Martínez Cobo, Sr. Ruhashyankiko y Sr. Yango.

g) Por 22 votos contra 2 y 1 abstención, quedó aprobado el párrafo 4 de la parte dispositiva de las enmiendas del Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1) en su forma enmendada.

h) Por 23 votos contra ninguno, quedó aprobado el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.521) revisado oralmente con la inclusión de las palabras "con prioridad" después de "considere".

45. El texto de la resolución 2 (XXII), aprobado por la Subcomisión en su 572a. sesión, el 5 de septiembre de 1969, dice lo siguiente:

/...

Resolución 2 (XXII)

ESTUDIO ESPECIAL DE LA DISCRIMINACION RACIAL EN LAS
ESFERAS POLITICA, ECONOMICA, SOCIAL Y CULTURAL

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Habiendo examinado el informe provisional (E/CN.4/Sub.2/301) sobre el estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural presentado por el Relator Especial, Sr. Hernán Santa Cruz,

1. Expresa su sincero reconocimiento al Sr. Hernán Santa Cruz por su amplio y valioso informe, que representa un nuevo adelanto en la labor de la Comisión en esta materia, y aprueba el enfoque que se da en el informe a los problemas considerados, teniendo en cuenta el intercambio de opiniones sobre el informe que ha tenido lugar en el 22.º período de sesiones de la Subcomisión;

2. Invita al Relator Especial a completar su informe con datos sobre características y manifestaciones de la política de segregación en toda el Africa meridional: en Rhodesia del Sur, en Namibia y en los territorios bajo dominación portuguesa;

3. Pide al Relator Especial que agregue a su informe datos sobre el renacimiento del nazismo en las circunstancias contemporáneas, sobre la discriminación racial y sobre la relación entre el nazismo en sus formas actuales y las fuerzas racistas en diferentes regiones del mundo, y que incluya en su informe un examen de todas las ideologías análogas que se basan en la intolerancia racial;

4. Pide al Relator Especial que prepare recomendaciones sobre las medidas que deben tomarse para combatir la discriminación racial y el nazismo y todas las demás ideologías análogas;

5. Pide nuevamente al Secretario General que preste al Relator Especial toda la ayuda necesaria para que termine su informe y, en particular, que pida nuevamente a los Estados que se aseguren de que la información solicitada a los gobiernos de conformidad con la resolución 10 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos se presente oportunamente y se entregue al Relator Especial;

6. Pide al Relator Especial que siga trabajando en su tarea, teniendo en cuenta el intercambio de opiniones sobre el informe que ha tenido lugar durante el 22.º período de sesiones de la Subcomisión, y que prepare y presente un informe definitivo a tiempo para que la Subcomisión lo considere con prioridad en su 23.º período de sesiones.

III. ESTUDIO DE LA IGUALDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(Tema 4 del programa)

Introducción

46. En sus sesiones 561a. a 564a., 573a., 574a. y 576a., la Subcomisión examinó el tema 4 de su programa.
47. La Subcomisión tuvo ante sí el estudio final (E/CN.4/Sub.2/296), presentado por el Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat. El estudio se había realizado en cumplimiento de la resolución 1 (XV) de la Subcomisión. Por recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, en su resolución 958 (XXXVI), de 12 de julio de 1963, había aprobado esa decisión. Al llevar a cabo el estudio, el Relator Especial se había guiado por las directivas generales relativas a la preparación de los estudios y de las recomendaciones para la adopción de medidas que se enunciaban en la resolución B de la Subcomisión, aprobada en su sexto período de sesiones y modificada por la Comisión de Derechos Humanos en virtud de la resolución III, de su 10.^o período de sesiones.
48. El informe constaba de un prefacio, cinco capítulos y dos anexos. En el prefacio se esbozaba el alcance del estudio. El capítulo I contenía una breve introducción histórica en la que se exponían ciertos antecedentes del concepto de juicio imparcial tal como se reconoce actualmente. En el capítulo II, relativo al significado de la igualdad en la administración de justicia, se exploraban las consecuencias de concepto del juicio imparcial, sin que fuera necesario referirse a la cuestión de si el Relator Especial había observado la existencia de discriminación en relación con algún aspecto determinado del mismo. El capítulo III trataba de las formas en que, según había podido comprobar el Relator Especial, actuaba la discriminación en la administración de la justicia. En el capítulo IV se describían los métodos que se habían adoptado para combatir la discriminación en la administración de la justicia. El capítulo V contenía las conclusiones y recomendaciones del Relator Especial. En el Anexo I se describía el procedimiento seguido para la preparación del estudio, y el Anexo II contenía el esquema sobre cuya base se había reunido la información para el mismo.

/...

49. Al presentar su informe, el Relator Especial señaló que estaba basado en las monografías relativas a ochenta y seis países y varios territorios no autónomos. Los países estaban enumerados en la nota al pie de página del párrafo 10 del informe. Dichas monografías habían estado preparándose desde el verano de 1965. Los miembros de la Subcomisión habían visto cómo el informe se desarrollaba gradualmente, año tras año, a medida que lo permitía el material disponible. La principal diferencia entre la versión definitiva y el proyecto de informe del año anterior (E/CN.4/Sub.2/289) era que los capítulos III y IV se habían ampliado sobre la base de la nueva información, y que se había añadido el capítulo V, que contenía las conclusiones y recomendaciones.

50. El Relator Especial explicó que había dos razones por las cuales en el capítulo II se examinaban las consecuencias del juicio imparcial, sin que fuese necesario referirse a la cuestión de si se había observado la existencia de discriminación en relación con algún aspecto determinado del mismo. En primer lugar, en todo estudio de la discriminación en la administración de la justicia había que analizar la naturaleza del juicio imparcial, ya que, si no se conocía la norma, mal podía saberse exactamente qué prácticas existentes la violaban. En segundo lugar, era esencial definir las consecuencias del derecho al juicio imparcial, en relación con el cual no debía existir ninguna discriminación en ningún momento.

51. El Relator Especial observó que en el capítulo III se mencionaban prácticamente todos los países considerados y en el capítulo IV se citaba a todos sin excepción. Se había comprobado que en la administración de la justicia existían todas las categorías de discriminación enumeradas en el artículo 2 de la Declaración Universal. El Relator Especial opinaba que la discriminación por razones de posición económica era la más difundida y la que contribuía a la aparición de otras categorías de discriminación, especialmente la discriminación por motivos de raza o de color.

52. El Relator Especial señaló que las conclusiones y recomendaciones del capítulo V estaban relacionadas, por medio de referencias, con la información contenida en capítulos anteriores. En esas conclusiones y recomendaciones estaban comprendidos los métodos adoptados para combatir la discriminación en la administración de la justicia que se habían descrito en el capítulo IV. También se sugerían métodos para combatir las categorías de discriminación señaladas en el capítulo III, pero para las cuales, como se indicaba en el capítulo IV, no se consignaba la solución correspondiente.

53. El Relator Especial manifestó que el capítulo V concluía con un proyecto de principios, que se presentaba como posible base de uno o más instrumentos internacionales relativos a la igualdad en la administración de la justicia. Al incluir un proyecto de principios en el informe, el Relator Especial había seguido el precedente establecido en informes anteriores sobre diversos aspectos de la discriminación, preparados bajo la dirección de relatores nombrados por la Subcomisión. La Subcomisión había examinado y revisado previamente ese proyecto de principios y lo había recomendado a la Comisión de Derechos Humanos como posible base de instrumentos internacionales. El Relator Especial estimó que la Subcomisión podía análogamente centrar el debate sobre el proyecto de principios.

54. El Relator Especial añadió que en el capítulo V también había recomendado que el estudio se imprimiera y se publicara en la misma forma en que se habían impreso estudios anteriores sobre diversos aspectos de la discriminación. Asimismo había recomendado que se continuasen estudiando los aspectos de la igualdad en la administración de la justicia dentro del programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos, de las Naciones Unidas.

Examen del informe en su conjunto

55. Los oradores felicitaron cordialmente al Relator Especial por haber producido una obra maestra de jurisprudencia, que era fruto, evidentemente, de mucho trabajo y reflexión. Se hicieron también algunas observaciones sobre partes del informe distintas del proyecto de principios.

56. Un orador afirmó que la mayor parte de la discriminación en la administración de la justicia era discriminación de hecho. El funcionamiento de un sistema judicial dependía en gran parte de su base social, y ésta, a su vez, se veía influida por factores económicos. No podría existir igualdad en la administración de la justicia en ciertos países mientras no se llevara a cabo un profundo cambio social. La pobreza impedía con frecuencia que grandes sectores de la población disfrutaran de derechos legales. El ingreso en la carrera jurídica y en la judicatura se limitaba con frecuencia a las clases medias y superiores. Con frecuencia se daba disparidad entre las sentencias dictadas por diversos jueces por un delito que esencialmente era el mismo, y entre las decisiones en favor o en contra de la concesión de un período de prueba a menores delincuentes en circunstancias similares.

/...

57. Se señaló que en muchos países las condiciones económicas impedían que el Estado asegurara la igualdad en la administración de la justicia, dado que había escasez de jueces, abogados y demás personal judicial. En tales condiciones resultaba imposible conceder siempre una rápida audiencia o lograr que se prestara a todos la debida asistencia legal.

58. Se señaló el peligro de juicios de personas por tribunales especiales, principalmente porque tales tribunales eran un medio de privar a los acusados de las garantías normales.

59. Se mencionó la discriminación en la administración de la justicia por la falta de medios económicos de los litigantes o acusados. En cuanto a los acusados, la discriminación por la posición económica surge, por ejemplo, en relación con la libertad bajo fianza.

60. Muchos oradores apoyaron la sugerencia hecha por el Relator Especial, en el párrafo 593 de su informe, de que se imprimiera y se diera amplia difusión a este estudio; un miembro manifestó estar de acuerdo con esta sugerencia en el entendimiento de que el estudio se pondría a la venta.

61. Además, varios miembros sugirieron mejoras en varios pasajes del informe, y el Relator Especial se comprometió a tener en cuenta estas sugerencias antes de que se imprimiese el informe.

Examen del proyecto de principios

62. Como la mayoría de las partes anteriores del informe habían sido ya examinadas en otros períodos de sesiones, la Subcomisión concentró su debate en el proyecto de principios expuestos en el párrafo 596 de ese documento.

63. El procedimiento que debía seguirse en relación con el proyecto de principios que figura en el párrafo 596 del informe fue objeto de algunas deliberaciones. Se señaló el número y minuciosidad de estos principios y la brevedad del tiempo disponible para su examen. Se sugirió que se tratase el proyecto de principios de la misma manera que el resto del informe, es decir, que el Relator Especial siguiese siendo responsable de él y que en este entendimiento se remitiese el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos; el Relator Especial, sin embargo, podía modificarlos a la luz de las deliberaciones de la Subcomisión, del mismo modo que había introducido modificaciones en el resto de su informe en ocasiones anteriores. Prevalció

/...

la opinión de que el estudio de la igualdad en la administración de la justicia debía considerarse tal como lo habían sido los informes anteriores sobre aspectos de la discriminación, es decir, que la Subcomisión debatiese y modificase el proyecto de principios y lo remitiese a la Comisión de Derechos Humanos bajo la responsabilidad de la misma Subcomisión, pero sin recomendar si el proyecto debía convertirse en una convención, una recomendación, una declaración o más de uno de estos instrumentos.

64. La Subcomisión examinó el proyecto de principios en sus sesiones 562a. a 564a., 573a. y 574a., sin tomar decisión definitiva sobre su redacción. En los párrafos siguientes se describen algunas de las cuestiones debatidas y de las sugerencias hechas.

65. El proyecto de principio No.1 decía así:

"1. Toda persona tendrá derecho a las siguientes garantías en la determinación de sus derechos y obligaciones y en el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición:

- "i) el derecho de acceso a los tribunales;
- "ii) el derecho a ser oído por el juez competente, es decir, por el tribunal competente previamente establecido por la ley, y no por un tribunal asignado o establecido especialmente para juzgar su caso;
- "iii) el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial;
- "iv) el derecho a ser asistido y representado por un defensor de su elección;
- "v) el derecho a un juicio pronto y sin demora, a reserva de su igual derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación y presentación de su defensa;
- "vi) el derecho a presentar su defensa y a presentar testigos y otras pruebas, a interrogar testigos, ya sea personalmente o por intermedio de su abogado;
- "vii) el derecho a un juicio público, a reserva de que la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por razones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia;

- "viii) el derecho a que la decisión se base solamente en las pruebas presentadas durante el juicio y conocidas por todas las partes;
- "ix) el derecho a que la decisión sobre la causa en su contra sea pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores;
- "x) el derecho de apelación;
- "xi) para el examen de cualquier acusación de materia penal, además de lo enumerado precedentemente:
 - "a) el derecho a que se le presuma inocente hasta que se pruebe lo contrario con arreglo a la ley;
 - "b) el derecho a que se le informe sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la acusación formulada contra ella;
 - "c) el derecho a ser informada, si no tuviera defensor, de su derecho a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección;
 - "d) el derecho, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
 - "e) el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo para que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
 - "f) el derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
 - "g) el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma y a confesarse culpable."

66. Se planteó la cuestión de si los derechos enunciados en este proyecto de principio estaban destinados a aplicarse al procedimiento civil y a otros procedimientos judiciales no penales lo mismo que al procedimiento penal. El Relator Especial respondió afirmativamente. Las palabras de introducción del proyecto del principio habían sido tomadas del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituía la base del estudio del Relator Especial según lo dispuesto por la Subcomisión, por la Comisión de Derechos Humanos y por el Consejo Económico y Social.

/...

En el prefacio del informe se analizaba el sentido del artículo 10 de la Declaración Universal y se dejaba en claro que el estudio abarcaba no solamente el procedimiento penal sino también el procedimiento civil, el procedimiento administrativo y cualquier otro procedimiento judicial en el que se determinasen los derechos u obligaciones legales de una persona. El proyecto de principio estaba destinado a tener el mismo alcance. El Relator Especial convino en que podría ser conveniente referirse expresamente, en las palabras de introducción del proyecto de principio, al procedimiento penal, al procedimiento civil y al procedimiento administrativo a la vez que se mantenía la actual redacción general tomada del artículo 10 de la Declaración Universal.

67. Se planteó la cuestión de si el proyecto de principio No.1 estaba destinado a abarcar las cuestiones de equidad en el sentido que se da a este término en los sistemas jurídicos anglosajones. Se afirmó que la equidad entrañaba con frecuencia el ejercicio de facultades discrecionales más bien que la aplicación de derechos. El Relator Especial contestó que en la época contemporánea la equidad constituía en los sistemas anglosajones, en su mayor parte, un cuerpo de normas fijas cuya aplicación entrañaba aproximadamente el mismo grado de discreción que la aplicación del common law. Indicó, por consiguiente, que no era necesaria ninguna modificación en el proyecto de principio para que abarcase también el procedimiento de equidad.

68. Algunos miembros creían conveniente evitar el uso de la palabra "garantías" en la frase inicial del proyecto de principio. Se señaló que en algunos sistemas jurídicos esta expresión hacía referencia al procedimiento en virtud del cual se aplicaban los derechos y no a los derechos mismos. El artículo 10 de la Declaración Universal, del que derivaba ese pasaje, no utilizaba la expresión "garantías".

69. Se observó que el inciso ii) del proyecto de principio incluiría involuntariamente dentro de su alcance a los tribunales arbitrales y órganos análogos.

70. Se indicó que el derecho a un juicio pronto y sin demora estaba más protegido en la esfera penal que en la esfera civil. En consecuencia se discutió si no se debía redactar el inciso v) del proyecto de principio para que fuera aplicable a los procesos civiles. Por otra parte, se sostuvo que la necesidad de una sustanciación rápida convenía por igual al fuero civil y al fuero penal. El Relator Especial declaró que su intención había sido que la disposición fuera aplicable a todos los procedimientos judiciales, porque la demora en cualquier tipo de proceso judicial

/...

era una discriminación contra los pobres, por las razones expuestas en el capítulo III del informe. El Relator recordó también que el propósito del proyecto de principios no era simplemente reflejar la posición ya existente en la mayoría de los países, sino servir de base para instrumentos internacionales que significaran un paso adelante en pro de la igualdad en la administración de la justicia.

71. Se preguntó el significado de la expresión "igual derecho" que figuraba en el inciso v) del proyecto de principio.

72. Se afirmó que la referencia a los "medios", en el inciso v) del proyecto de principio, era imprecisa y, asimismo, que este inciso debía tratar únicamente del elemento tiempo.

73. Se sugirió que en el inciso vi) del proyecto de principio, se hiciera referencia al derecho a que "se presenten y examinen testigos y otras pruebas", de igual modo que se hacía referencia al derecho del litigante o del acusado, personalmente o por intermedio de su abogado, a presentar y examinar testigos y pruebas, ya que en algunos sistemas jurídicos los testigos son presentados e interrogados por el juez si accede a una solicitud en este sentido.

74. Se sugirió que el inciso vii) del proyecto de principio hablase de "la prensa y el público" en vez de "la prensa o el público" [no aplicable al texto español], con el fin de que el texto coincidiera con el del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

75. Varios miembros sugirieron que se suprimieran del inciso vii) del proyecto de principio las palabras "en una sociedad democrática" que figuraban después de las palabras "seguridad nacional". El Relator Especial recordó que la limitación al derecho a un juicio público, que figuraba en el proyecto de principio, incluida la referencia a la "seguridad nacional en una sociedad democrática", había sido tomada del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, algunos miembros afirmaron que muchos lectores del proyecto de principio podrían ignorar el origen de las palabras "en una sociedad democrática" en relación con el presente contexto, y que su presencia en el proyecto de principios podría ser motivo de confusión. Se opinó también que esa expresión era demasiado imprecisa para incluirla en el texto. Prácticamente todos los regímenes afirmarían sin duda su carácter democrático. Se dijo también que la expresión "sociedad democrática" derivaba de actitudes anacrónicas y exclusivamente europeas. Otros oradores afirmaron, en cambio, que era conveniente incluir en el texto la expresión

/...

"en una sociedad democrática" porque proporcionaba ciertas garantías contra la limitación arbitraria del derecho a un juicio público por razones de seguridad nacional. La inclusión de esa expresión en instrumentos sobre derechos humanos haría más fácil para los órganos supervisores el examen del modo en que los Estados imponían limitaciones al ejercicio de los derechos. La expresión "en una sociedad democrática" había sido reconocida en cierto modo internacionalmente desde su inclusión en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se afirmó que la aprobación de este último instrumento en fecha tan reciente como 1966 demostraba que la expresión no derivaba de actitudes anacrónicas o exclusivamente europeas.

76. Se preguntó si no era excesivamente amplio el alcance de la excepción establecida en el inciso ix) del proyecto de principio al derecho a que la decisión sobre la causa propia sea pública.

77. Algunos miembros cuestionaron que el apartado d) del inciso xi) del proyecto de principio debiera incluir la expresión "siempre que el interés de la justicia lo exija" como condición para que se nombre defensor al acusado.

78. Se sugirió que se añadiese al apartado e) del inciso xi) del proyecto de principio una referencia al derecho del acusado a examinar las pruebas documentales de la acusación.

79. Se hicieron dos sugerencias de adiciones al inciso xi) del proyecto de principio, encaminadas ambas a reducir el período de detención a que pudiera estar sujeto el acusado. Según la primera de esas sugerencias, debería hacerse referencia al derecho, sin discriminación alguna, a una visita preliminar dentro de un plazo razonable para determinar si había motivos suficientes para detener al acusado hasta la celebración del juicio. La segunda sugerencia proponía que se agregase una referencia al derecho, sin discriminación alguna, a prestar caución como procedimiento normal aplicable en todos los procesos penales.

80. El proyecto de principio No.2 decía así:

"2. Los asuntos relacionados con la administración de justicia serán reglamentados, al máximo compatible con la naturaleza de la cuestión, mediante las disposiciones constitucionales o legales o por decisiones de los tribunales."

/...

81. Se señaló que este proyecto de principio no indicaba qué cuestiones en particular debían ser reguladas por disposiciones constitucionales y cuáles por disposiciones legales. Se dijo que determinados aspectos administrativos podían encomendarse confiadamente a la decisión de las autoridades ejecutivas. En relación con el mismo proyecto de principio se indicó que en algunos sistemas jurídicos no son los tribunales mismos quienes dictan las normas de procedimiento judicial y que, por consiguiente, era inadecuada la referencia a las "decisiones de los tribunales". Otros miembros, sin embargo, no hallaron inconveniente en aceptar dicha expresión, ya que sus propios sistemas jurídicos permitían que los tribunales dictaran normas procesales.

82. El proyecto de principio No.3 decía así:

"3. En los países en los que exista Constitución escrita, ésta deberá establecer por lo menos las normas generales relativas a la administración de justicia."

83. En relación con este proyecto de principio, se sugirió que se hiciera referencia a las "normas básicas" relativas a la administración de justicia en el sentido de las normas que debían ser previstas en las constituciones escritas existentes.

84. Se preguntó si los principios 2 y 3 eran necesarios.

85. El proyecto de principio No.4 decía así:

"4. Las leyes nacionales referentes a los derechos de igualdad de acceso a los tribunales y de igualdad ante la ley en general deberán expresar concretamente que estos derechos se han de dar a todos, sin distinción de ninguna especie, tales como por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

86. Se sugirió que en este proyecto de principio se hiciera referencia al "pensamiento filosófico" entre los motivos que no debían ser fundamento de distinción alguna en relación con el derecho de igualdad de acceso a los tribunales y de igualdad ante la ley en general.

87. El proyecto de principio No.5 decía así:

"5. Por lo que hace a la administración de la justicia deberá garantizarse a las mujeres casadas el derecho a un domicilio independiente."

88. Algunos miembros opinaron que se debía redactar de nuevo este principio para enunciar claramente que la mujer casada debía tener libertad de optar o no por un domicilio independiente. Se estimó que el texto del proyecto de principio podría
/...

imponer a la mujer casada la obligación de tener un domicilio independiente. El Relator Especial señaló que el texto de proyecto de principio se había tomado de la resolución 587 D III (XX) del Consejo Económico y Social.

89. Los proyectos de principios Nos. 6 a 8 decían así:

"6. Habida cuenta de que son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, la independencia e imparcialidad de los miembros del poder judicial de todas las categorías las leyes y prácticas que rijan en materia de formación, elección, jurisdicción, juramento o promesa, privilegios e inmunidades, posesión del cargo, traslado, sueldos y pensiones, limitaciones impuestas a las actividades no judiciales, circunstancias que los descalifiquen para actuar en determinados casos, protección contra las influencias indebidas brindada por el derecho penal y sanciones que les son aplicables deberán garantizar esa independencia e imparcialidad.

"7. Habida cuenta de que la independencia e imparcialidad de los jurados y asesores, donde existan dichas funciones, son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, dicha independencia e imparcialidad deberá ser garantizada por las leyes y prácticas relacionadas con su selección y compensación, su juramento o promesa, sus inmunidades, la incompatibilidad de ciertas actividades con las funciones de jurado o asesor, las recusaciones que puedan hacerse a su actuación en determinados casos, la protección contra las influencias indebidas que les brinda el derecho penal y las sanciones que les son aplicables.

"8. Habida cuenta de que la independencia e imparcialidad de los abogados que ejerzan su profesión ante los tribunales son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, dicha independencia e imparcialidad deberán ser garantizadas por las leyes y prácticas que afecten la relación existente entre esos abogados y sus organizaciones, por una parte, y el Estado por la otra, la incompatibilidad de ciertas actividades con la profesión de abogado, las circunstancias en las que un abogado en ejercicio puede negarse a aceptar un asunto, los motivos por los cuales un abogado en ejercicio no puede negar sus servicios a un cliente, el acceso de la persona a su abogado y el secreto de la comunicación entre ambos, el mantenimiento del secreto de la información recibida por los abogados en las relaciones profesionales con sus clientes, las inmunidades de los abogados y las sanciones que les son aplicables."

90. Se sostuvo que los proyectos de principios 6, 7 y 8 eran demasiado complicados y detallados y que había que simplificarlos. Se preguntó qué significaba la alusión que se hacía en los principios 6 y 7 a la "protección contra las influencias indebidas brindada por el derecho penal" a los jueces, jurados y asesores, y qué significaba asimismo la alusión que se hacía en el mismo proyecto de principios a las "sanciones" aplicables a dichos jueces, jurados y asesores. También se planteó la

/...

cuestión de si el proyecto de principio No.6 debía referirse a la "jurisdicción" de los jueces. Se puso en tela de juicio si el mismo principio debía mencionar los "privilegios" de los jueces, y se sugirió que sería adecuado reemplazar esta palabra por "prerrogativas". Respecto del proyecto de principio No.8, se preguntó cuáles eran las circunstancias en que un abogado en ejercicio podía negarse a aceptar un asunto, y qué significaba la referencia del proyecto de principio a la "imparcialidad de los abogados" pues es de esperar que un abogado defienda la causa de su cliente.

91. El proyecto de principio No.9 decía así:

"9. Las leyes nacionales deberán garantizar que toda persona tenga igual acceso a la justicia, a la actuación como jurado o asesor y a la profesión de abogado, sin distinción de ninguna especie, tales como por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

92. Varios miembros sugirieron que se volviese a redactar este proyecto de principio de manera tal que subrayase la no discriminación y estableciese en consecuencia que las leyes nacionales deberían garantizar que no se negase a nadie el acceso a la justicia, a la actuación como jurado o asesor y a la profesión de abogado por los motivos discriminatorios indicados en el proyecto de principio.

93. Se señaló que este proyecto de principio, al igual que los proyectos de principio 1 y 4, seguía la redacción del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, empleando la expresión "sin distinción de ninguna especie". Se alegó que, si bien esta expresión de índole general era adecuada en el caso de los principios 1 y 4, que enunciaban derechos fundamentales, no lo era en el de este proyecto de principio, que se refería a las leyes nacionales sobre el acceso a la justicia, la actuación como jurado o asesor y la profesión de abogado. Respecto de esta cuestión se consideró lícito que el Estado estableciese restricciones razonables.

94. El proyecto de principio No.10 decía así:

"10. En vista de que la formación de personas aptas para desempeñarse como jueces, abogados e intérpretes judiciales es de interés público, el Estado deberá subvencionar dicha formación y hacerlo sin distinción de ninguna especie, tales como por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

/...

95. Varios miembros señalaron que algunos países no estaban en situación económica que les permitiese subvencionar la formación de jueces y otros funcionarios judiciales. Se sugirió que se volviese a redactar el principio para que estableciese que, cuando el Estado subvencionase la formación de jueces, abogados e intérpretes judiciales, debería hacerlo sin discriminaciones.

96. También se subrayó el riesgo de que las personas a las que se había dado formación a expensas del Estado para que ejerciesen en esas profesiones pudiesen no hacerlo en sus países de origen. Por otra parte se señaló que el proyecto de principio estaba dirigido a que el Estado desempeñase la función que le correspondía al ayudar a las personas de escasos recursos a tener acceso a la justicia, a la profesión de abogado y a ocupaciones conexas.

97. Se afirmó que la referencia concreta que hacía el proyecto de principio a los intérpretes judiciales tenía carácter restrictivo y que debía ser ampliada para que comprendiese a todos los tipos de funcionarios judiciales.

98. El proyecto de principio No.11 decía así:

"11. La distribución de los tribunales dentro de un país y los movimientos de los jueces que no tienen sede fija, serán determinados con arreglo a la distribución de la población, a reserva de las necesidades especiales de las personas que viven en zonas aisladas."

99. Con respecto a este proyecto de principio, se indicó que podrían designarse nuevos jueces para despachar los asuntos cuando el volumen de trabajo con que se enfrentarían los tribunales fuera demasiado grande. Algunos miembros preguntaron qué relación tenía ese principio con la igualdad en la administración de justicia.

100. El proyecto de principio No.12 decía así:

"12. Deberán adoptarse medidas para eliminar la rigidez y la complejidad innecesarias de los procedimientos judiciales."

101. Se inquirió qué relación había entre este proyecto de principio y la igualdad en la administración de justicia, y se sugirió que fuera suprimido.

102. El proyecto de principio No. 13 decía así:

"13. Deberán adoptarse medidas apropiadas a las circunstancias imperantes en cada país, para reducir las dilaciones judiciales al mínimo compatible con el derecho del acusado o de las demás partes en los procedimientos judiciales a preparar y presentar adecuadamente su defensa."

/...

103. Se formuló la pregunta de qué relación existía entre este proyecto de principio y la igualdad en la administración de justicia. Se preguntó asimismo si la idea expuesta en ese proyecto de principio no estaba ya incluida en el inciso v) del proyecto de principio No. 1.

104. El Relator Especial sugirió que se aclarara el significado del proyecto de principio, agregándole al comienzo las siguientes palabras "en vista de las penalidades ocasionadas por las demoras en los procedimientos judiciales especialmente a las personas pobres."

105. El proyecto de principio No. 14 decía así:

"14. Salvo en situaciones de emergencia nacional, los civiles no serán sometidos a la jurisdicción de tribunales militares."

106. Varios miembros estimaban que las palabras "Salvo en situaciones de emergencia nacional", que figuraban en este proyecto de principio, eran demasiado vagas, y una de las sugerencias formuladas fue que se reemplazaran por "salvo en tiempo de guerra". Otra sugerencia propugnaba la supresión de dichas palabras. Se señaló que podría existir una relación entre este proyecto de principio y el inciso ii) del proyecto de principio No. 1, sobre el derecho a ser oído por el tribunal competente previamente establecido por la ley o establecido de conformidad con el derecho preexistente, y no por un tribunal asignado o establecido especialmente para juzgar el caso.

107. El proyecto de principio No. 15 decía así:

"15. Los juicios en rebeldía no se celebrarán sin dar al acusado las garantías apropiadas, incluida la notificación previa, y sin que se haya dado antes al acusado una oportunidad de hallarse presente en el proceso; en los juicios en rebeldía la representación por un defensor deberá ser obligatoria; a las personas condenadas en rebeldía deberá concedérseles el derecho a la reapertura o a la revisión de su proceso; se prohibirán los juicios en rebeldía por delitos políticos."

108. En relación con este proyecto de principio, se alegó que la disposición del inciso d) del párrafo iii) del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que toda persona tiene derecho a hallarse presente en el proceso, parecía prohibir totalmente los juicios en rebeldía. Se agregó que, puesto que hay regímenes jurídicos que no admiten la celebración de juicios en rebeldía, el proyecto de principio debía contener las palabras "en los regímenes

jurídicos que los autorizan", después de las palabras iniciales "Los juicios en rebeldía". Se alegó que hacer obligatoria la representación por un defensor en los juicios en rebeldía era un requisito demasiado inflexible, ya que algunos países pueden no disponer de los abogados necesarios. Se indicó asimismo que tal vez el propio acusado no deseara estar representado por un defensor. Se preguntó cómo podrían las legislaciones nacionales prever la reapertura o la revisión de los procesos de personas condenadas en rebeldía.

109. El proyecto de principio No. 16 decía así:

"16. Deberán promulgarse leyes nacionales encaminadas a prohibir o limitar al máximo posible las discriminaciones en el ejercicio de la facultad gubernamental de someter a proceso judicial a los sospechados de delitos."

110. Varios miembros sugirieron la supresión de las palabras "o limitar" en este proyecto de principio, ya que consideraban que su inclusión permitiría la continuación de prácticas discriminatorias. Se señaló que en algunos regímenes jurídicos las autoridades no tienen otra opción que proceder contra las personas cuando haya contra ellas suficientes pruebas de delito. Se indicó también que con frecuencia la parte perjudicada tiene derecho a entablar una acción penal incluso cuando las autoridades no quieren hacerlo.

111. El proyecto de principio No. 17 decía así:

"17. Cuando legalmente un asunto pueda ser juzgado por cualquiera de varios jueces o salas, la asignación del asunto a un juez o sala deberá determinarse por un sistema mecánico basado en el azar."

112. En relación con este proyecto de principio, varios miembros pusieron en tela de juicio las palabras "un sistema mecánico basado en el azar". Una de las sugerencias formuladas fue la supresión del proyecto de principio, en tanto que según otra éste debía redactarse de nuevo para que estableciera de hecho que, cuando legalmente un asunto pueda ser juzgado por uno o varios jueces o salas, la asignación del asunto al juez o sala deberá determinarse por un sistema que garantice un juicio imparcial.

113. El proyecto de principio No. 18 decía así:

"18. A reserva de la posible prioridad de los asuntos en materia penal en los lugares en que los mismos tribunales conocen de asuntos en materia penal y civil, los juicios deberán celebrarse estrictamente en el orden de presentación de los asuntos ante el tribunal."

/...

114. Varios miembros estimaban que este proyecto de principio era demasiado inflexible, y una de las sugerencias hechas fue que se agregaran las palabras "dispuestos para la vista" antes de "deberán celebrarse". Se señaló la existencia de una posible relación entre este proyecto de principio y el inciso v) del proyecto de principio No. 1.

115. El proyecto de principio No. 19 decía así:

"19. Las leyes nacionales relacionadas con la competencia de los tribunales deberán permitir el cambio de jurisdicción, a petición del acusado o de otra parte, cuando dicho cambio ofrezca posibilidades de garantizar un juicio imparcial."

116. Con respecto a este proyecto de principio, se arguyó que los factores que ocasionarían el cambio de lugar de la vista de un juicio muchas veces no incluirían en la práctica la petición del acusado o de otra parte en el juicio. Por otra parte, se hizo referencia a los párrafos 253 a 255 del informe, donde aparecían ejemplos de disposiciones legales que permitían cambiar el lugar de la vista, a petición de una parte y para que el juicio fuera imparcial, de un tribunal que normalmente tuviera jurisdicción a otro tribunal, cuando la opinión local pudiera influir sobre el jurado, los testigos o el propio tribunal.

117. El proyecto de principio No. 20 decía así:

"20. Las medidas adoptadas para la protección especial de los menores en los procedimientos judiciales no deberán menoscabar su derecho a la igualdad en la administración de justicia."

118. Se sugirió que se ampliara el alcance de este proyecto de principio para establecer que las medidas de rehabilitación y otros procedimientos utilizados a la luz de la actual evolución de las ciencias sociales no menoscabaran el derecho a la igualdad en la administración de justicia, no sólo de los menores sino de las personas en general.

119. El proyecto de principio No. 21 decía así:

"21. En los juicios de personal militar ante tribunales militares se deberán otorgar a la persona acusada las garantías fundamentales de un juicio imparcial establecidas en el principio 1, con la salvedad de que puedan imponerse las limitaciones necesarias al derecho a un juicio público."

120. Se sugirió que en este proyecto de principio se suprimieran las palabras "con la salvedad de que puedan imponerse las limitaciones necesarias al derecho a un juicio público", pues se daba demasiada importancia al secreto en los juicios de

/...

personal militar y ya se habían previsto en el inciso vii) del proyecto de principio No. 1 las limitaciones admisibles al derecho a un juicio público.

121. El proyecto de principio No. 22 decía así:

"22. Las leyes nacionales relativas a la asistencia letrada deberán desarrollarla al máximo compatible con los recursos económicos del país respectivo, con miras a eliminar definitivamente todas las expensas dimanadas de la interposición de una acción o defensa razonables en cualquier procedimiento judicial, ya sea que dichas expensas correspondan a aranceles judiciales, honorarios de abogados, honorarios de testigos expertos, gastos de viaje de los testigos u otros conceptos."

122. Se llegó a un acuerdo general en cuanto a la oración inicial de este proyecto de principio. No obstante, hubo divergencias de opinión en cuanto al resto de ese proyecto de principio, donde se preveía la eliminación definitiva de todas las expensas dimanadas de la interposición de una acción o defensa razonables.

123. Por un lado, se defendió el texto del proyecto de principio, ya que su aplicación pondría término a la discriminación basada en la posición económica en materia del acceso a los tribunales y de la garantía de que éstos actuaran con justicia. Se puso de relieve el carácter anacrónico de muchas de las disposiciones establecidas con respecto al acceso a los tribunales. Se señaló que en cierta época las personas acaudaladas habían empleado policías particulares, e incluso ejércitos, para su protección, en tanto que en la actualidad había fuerzas de policía y ejércitos nacionales. Hubo una época en que se cobraban derechos de peaje en las carreteras y canales, pero se habían abolido esos derechos y el público tenía acceso sin restricciones a las carreteras y canales. Se preguntó por qué el acceso a los tribunales de justicia habría de recibir un trato distinto. No bastaba con la prestación por benevolencia de asistencia letrada a los pobres por los colegios de abogados y otros órganos; las personas carentes de recursos debían gozar del derecho a tener acceso a los tribunales, simplemente en su calidad de ciudadanos. Otro punto de vista era que las categorías de personas con acceso a los tribunales tendían a ser los ricos, que podían hacerlo personalmente, y las personas muy pobres, que recibían asistencia letrada en la mayoría de los países, mientras las personas que se encontraban entre esas categorías no podían defender sus derechos. Ya era hora de que se reconociera el derecho de todo el mundo a ser tratado con justicia, y el Estado debía reconocer sus responsabilidades al respecto, como lo había hecho en

/...

relación con la educación, la salud y la vivienda. Se sostuvo que en el proyecto de principio debía suprimirse la palabra "razonables", ya que toda persona sin recursos que necesitara asistencia letrada debía recibirla sin ninguna comprobación por parte de las autoridades públicas de lo razonable de las expensas.

124. Se arguyó por otra parte que la completa igualdad de las personas en cuanto a la administración de justicia era un ideal irrealizable, y se subrayó la falta de los recursos económicos necesarios en muchos países. Se señaló que la aplicación del proyecto de principio significaría que las sociedades con grandes recursos podrían querellarse entre sí y las costas del litigio tendrían que sufragarlas los contribuyentes en general.

125. Se examinaron también pasajes particulares del proyecto de principio. Se sostuvo que la eliminación de las costas judiciales fomentaría la iniciación de procedimientos sin ninguna perspectiva de éxito; por otro lado, se argumentó que había otros medios, aparte de la exigencia del pago de costas, para impedir el abuso de los procedimientos judiciales. Se observó que en muchos países se habían abolido las costas judiciales. En cuanto a los honorarios de los abogados, se señaló que, de existir un vínculo personal entre el abogado y su cliente en virtud del cual este último debiera pagar un honorario al primero, habría un mayor aliciente para que el abogado se esmerara en la prosecución de la causa. Se sostuvo además que el sistema de que el Estado pagara los honorarios de los abogados pondría en peligro la independencia de los profesionales del derecho. Por otro lado, se recordaron las disposiciones vigentes en virtud de las cuales se proporcionaron abogados a los pobres sin que tengan que pagar personalmente ningún honorario.

126. Se sugirió que se sustituyeran en el proyecto de principio las palabras "todas las expensas" por las palabras "la desigualdad en la administración de justicia que de otro modo resultaría de las expensas". Se sugirió también que el proyecto de principios previera la mayor limitación posible de las expensas dimanadas de la interposición de una acción o defensa razonables en cualquier procedimiento judicial. Se propuso además que en el proyecto de principio se librara al particular de dichas expensas sin establecer condiciones igualmente ventajosas para las personas o entidades ricas.

127. El proyecto de principio No. 23 decía así:

"23. Mediante planes de asistencia letrada o de alguna otra forma deberá garantizarse representación jurídica adecuada a las personas cuyas opiniones políticas puedan resultar una desventaja para ellas en los procedimientos judiciales, de no contar con esa representación."

128. Se expresó el temor de que la aplicación de este proyecto de principio No. 23 provocara discriminación a favor de personas de determinadas opiniones políticas en la asignación de asistencia letrada. En consecuencia, se sugirió la supresión del proyecto de principio.

129. El proyecto de principio No. 24 decía así:

"24. Los extranjeros que residan en forma permanente en un país tendrán derecho a la asistencia letrada en la misma medida que los ciudadanos."

130. Se propuso también que se suprimieran en este proyecto de principio las palabras "que residan en forma permanente", o que el principio concediera el beneficio de la asistencia letrada a todos los habitantes de un país.

131. Los proyectos de principios Nos. 25 a 28 decían así:

"25. Los jueces explicarán a las personas acusadas los derechos procesales fundamentales que les asisten durante el juicio y su derecho de apelación.

"26. Deberá permitirse a los jueces, jurados, asesores, a las personas acusadas, a las demás partes en los procedimientos judiciales, a los abogados, testigos e intérpretes hacer una promesa en lugar de prestar juramento en caso de que opongan objeciones al carácter religioso de cualquier fórmula de juramento que se les exija en relación con sus funciones en la administración de justicia.

"27. Cualquiera sea la jurisdicción de los tribunales religiosos que existan en un país, los tribunales civiles deberán suministrar un foro para el arreglo de todas las disputas judiciales. Ninguna persona deberá carecer de tribunal al cual recurrir, por el hecho de no pertenecer a ninguna de las religiones cuyos tribunales tengan competencia exclusiva en el asunto en litigio.

"28. Las leyes nacionales relativas a la libertad provisional con anterioridad al juicio o durante éste deberán estar redactadas de manera que se elimine toda exigencia de garantías pecuniarias y también de manera que la prisión con anterioridad al juicio o durante éste se reduzca al mínimo y se limite en lo posible cualquier ejercicio discriminatorio del poder de conceder la libertad provisional."

/...

132. Se sugirió que la aplicación del proyecto de principio No. 28, que suponía la eliminación de la exigencia de garantías pecuniarias para la libertad provisional con anterioridad al juicio o durante éste, supondría en la práctica la permanencia en prisión de personas que de otra manera habrían podido prestar caución. Se agregó que normalmente la fianza se fijaba teniendo en cuenta los recursos del acusado y, en consecuencia, la posibilidad de discriminación por motivos económicos no era grande. Se observó también que debía verse la situación no sólo desde el punto de vista de la persona interesada sino también desde el punto de vista del Estado, y que el propósito de la libertad bajo fianza era ante todo impedir que el acusado eludiera la justicia. Por otro lado, se indicaron posibles soluciones distintas de la prestación de caución.

133. Los proyectos de principios Nos. 29 a 33 decían así:

"29. Las supuestas confesiones obtenidas bajo la influencia de promesas, engaño, amenazas o uso de la fuerza serán inadmisibles como prueba y la obtención de supuestas confesiones por tales medios figurará como delito.

"30. Deberá proporcionarse servicio gratuito de interpretación a todas las personas acusadas y a las demás partes en los procedimientos judiciales si no dominan el idioma empleado en el tribunal.

"31. Deberán adoptarse disposiciones análogas, con carácter gratuito, respecto de las personas acusadas y demás partes en los procedimientos judiciales que sufran impedimentos de fonación o audición.

"32. Las leyes nacionales relacionadas con la publicidad de los procedimientos judiciales deberán estar redactadas de manera tal que prohíban, hasta la decisión final del tribunal, la publicidad perjudicial a las personas acusadas o a las demás partes en los procedimientos judiciales.

"33. Deberá exigirse a los tribunales que al pronunciar su fallo expongan motivos del mismo."

134. Se sugirió que se ampliara el alcance del proyecto de principio No. 33 a fin de abarcar las opiniones disidentes.

135. Los proyectos de principios Nos. 34 y 35 decían así:

"34. Las leyes nacionales relativas a las apelaciones ante los tribunales superiores deberán incluir disposiciones sobre apelación por motivos de aplicación discriminatoria de las leyes referentes a jurisdicción y procedimiento, así como del derecho de fondo.

/...

"35. Con miras a eliminar la discriminación originada por la condición jurídica del territorio a que pertenezca una persona, deberá aplicarse plenamente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960."

136. Se propuso que se agregasen en el proyecto de principio No. 35 las palabras "en que se proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas". Estas palabras - se observó - procedían de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, a la que el proyecto de principio hacía alusión.

137. Se sugirió también que el proyecto de principio No. 35 hiciera referencia a la propuesta de que se estableciera un órgano internacional para conocer en los delitos cometidos por personas que ejercieran autoridad de facto en Namibia.

138. Se propuso que se agregaran dos nuevos proyectos de principios. Según el primero no se permitiría emplear en los órganos judiciales a ex nazis o a personas que difundieran las ideas del nazismo, el apartheid y otras formas y manifestaciones de discriminación racial. Según el segundo proyecto de principio, la ley proporcionaría garantías contra el uso de los órganos judiciales con fines de terror político contra las masas y de venganza contra las organizaciones democráticas.

139. Después de considerar el proyecto de principios, la Subcomisión pasó a examinar su preámbulo. El preámbulo decía así:

"POR CUANTO los pueblos del mundo se han declarado, en la Carta de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

"POR CUANTO la Carta establece, como uno de los propósitos de las Naciones Unidas, el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

"POR CUANTO la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa,

/...

"POR CUANTO la Declaración Universal proclama en su artículo 10 que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal,

"POR CUANTO algunos aspectos de la administración de justicia han sido incluidos en las disposiciones de diversos instrumentos internacionales, incluidos el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 a) de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 16 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 16 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.

"POR CUANTO los tipos de discriminación basados en cada uno de los motivos condenados concretamente en el artículo 2 de la Declaración Universal se manifiestan en la administración de justicia,

"POR CUANTO en muchas partes del mundo se han ensayado métodos para combatir esos tipos de discriminación y se ha acumulado suficiente experiencia nacional como para justificar la aprobación de uno o varios instrumentos internacionales enderezados a eliminar la discriminación en la administración de justicia,

"POR TANTO se proclaman los siguientes principios con miras a eliminar todas las formas de discriminación en la administración de justicia: ".

140. Se consideró que el último párrafo del preámbulo era innecesario porque daba la impresión de que la acumulación de suficiente experiencia nacional era requisito previo para la aprobación de documentos internacionales sobre una materia dada.

141. Al terminar el debate sobre el proyecto de principios, el Relator Especial indicó que volvería a analizar las observaciones formuladas durante el debate sobre el mismo al presentar a la Subcomisión una revisión del proyecto de principios, realizada a la luz del debate.

Presentación del proyecto revisado de principios

142. En la 576a. sesión el Relator Especial distribuyó una versión revisada del proyecto de principios (E/CN.4/Sub.2/L.528 y Corr.1) y propuso que los aprobara la Subcomisión. El proyecto revisado de principios decía así^{1/}:

^{1/} Las revisiones y correcciones se indican ya sea por medio de subrayados ya por medio de notas de pie de página.

/...

"PROYECTO DE PRINCIPIOS SOBRE IGUALDAD EN
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

"POR CUANTO los pueblos del mundo se han declarado, en la Carta de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

"POR CUANTO la Carta establece, como uno de los propósitos de las Naciones Unidas, el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

"POR CUANTO la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, o fundada en la condición política jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa,

"POR CUANTO la Declaración Universal proclama en su artículo 10 que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal,

"POR CUANTO algunos aspectos de la administración de justicia han sido incluidos en las disposiciones de diversos instrumentos internacionales, incluidos el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 a) de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, el artículo 16 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el artículo 16 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas,

"POR CUANTO los tipos de discriminación basados en cada uno de los motivos condenados concretamente en el artículo 2 de la Declaración Universal se manifiestan en la administración de justicia,

"POR CUANTO en muchas partes del mundo se han ensayado métodos para combatir esos tipos de discriminación y se ha acumulado suficiente experiencia nacional como para justificar la aprobación de uno o varios instrumentos internacionales enderezados a eliminar la discriminación en la administración de justicia,

POR TANTO se proclaman los siguientes principios con miras a eliminar todas las formas de discriminación en la administración de justicia:

/...

"1. En la determinación de cualquier acusación contra ella en materia penal o en la determinación de sus derechos y obligaciones por medio de cualquier procedimiento civil, administrativo, u otro procedimiento judicial, toda persona podrá disfrutar de los siguientes derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición:

- "i) el derecho de acceso a los tribunales;
- "ii) el derecho a ser oída por el juez competente, es decir, por el tribunal competente previamente establecido por la ley, o establecido en virtud de leyes preexistentes y no por un tribunal asignado o establecido especialmente para juzgar su caso;
- "iii) el derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial;
- "iv) el derecho a ser asesorada y representada por un abogado defensor de su elección;
- "v) el derecho a un juicio pronto y sin demora, a reserva de su derecho 2/ a disponer del tiempo 3/ para la preparación y presentación de su defensa;
- "vi) el derecho, ya sea personalmente o por intermedio de su abogado defensor, a presentar su causa y a presentar o examinar testigos y otras pruebas, o a hacer que se presenten o examinen tales testigos u otras pruebas;
- "vii) el derecho a un juicio público, a reserva de que la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por razones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia;
- "viii) el derecho a que la decisión se base solamente en las pruebas presentadas durante el juicio y conocidas por todas las partes;
- "ix) el derecho a que la decisión sobre la causa sea pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores;

2/ La palabra "igual" antes de "derecho" ha sido suprimida.

3/ Las palabras "y de los medios adecuados" después de "tiempo" han sido suprimidas.

- "x) el derecho de apelación;
- "xi) para el examen de cualquier acusación en materia penal, además de lo enumerado precedentemente:
 - "a) el derecho a que se le presuma inocente hasta que se pruebe lo contrario con arreglo a la ley;
 - "b) el derecho a que se le informe sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causa de la acusación formulada contra ella;
 - "c) el derecho a ser informada, si no tuviera defensor, de su derecho a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección;
 - "d) el derecho, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
 - "e) el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo, a examinar los documentos de prueba en su contra y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo para que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
 - "f) el derecho a ser asistida gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
 - "g) el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma y a confesarse culpable.

"2. Los asuntos relacionados con la administración de justicia serán reglamentados, al máximo compatible con la naturaleza de la cuestión, mediante las disposiciones constitucionales o legales, por decisiones de los tribunales, según corresponda, y no por decisiones del Ejecutivo.

"3. En los países en los que exista Constitución escrita, ésta deberá establecer por lo menos las normas básicas generales relativas a la administración de justicia.

"4. Las leyes nacionales referentes a los derechos de igualdad de acceso a los tribunales y de igualdad ante la ley en general deberán expresar concretamente que estos derechos se han de dar a todos, sin distinción de ninguna especie, tales como por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

/...

"5. Por lo que hace a la administración de la justicia deberá garantizarse a las mujeres casadas el derecho a un domicilio independiente.

"6. Habida cuenta de que la independencia e imparcialidad de los miembros del poder judicial de todas las categorías son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, dicha independencia e imparcialidad deberá ser garantizada por las leyes y prácticas que rijan en materia de formación, elección, jurisdicción, juramento o promesa, prerrogativas e inmunidades, posesión del cargo, traslado, sueldos y pensiones, limitaciones impuestas a las actividades no judiciales, circunstancias que los descalifiquen para actuar en determinados casos, protección contra las influencias indebidas brindada por el derecho penal y sanciones que les son aplicables en el caso de que no demuestren independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

"7. Habida cuenta de que la independencia e imparcialidad de los jurados y asesores, donde existan dichas funciones, son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, dicha independencia e imparcialidad deberá ser garantizada por las leyes y prácticas relacionadas con su selección y compensación, su juramento o promesa, sus inmunidades, la incompatibilidad de ciertas actividades con las funciones de jurado o asesor, las recusaciones que puedan hacerse a su actuación en determinados casos, la protección contra las influencias indebidas que les brinda el derecho penal y las sanciones que les son aplicables en el caso de que no demuestren independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

"8. Habida cuenta de que la independencia de los abogados que ejercen su profesión ante los tribunales y su imparcialidad para prestar sus servicios a los posibles clientes son requisitos esenciales para fomentar la igualdad en la administración de justicia, dicha independencia e imparcialidad deberá ser garantizada por las leyes y prácticas que afecten la relación existente entre esos abogados y sus organizaciones, por una parte, y el Estado por la otra, la incompatibilidad de ciertas actividades con la profesión de abogado, las circunstancias en las que un abogado en ejercicio puede negarse a aceptar un asunto, los motivos por los cuales un abogado en ejercicio no puede negar sus servicios a un cliente, el acceso de la persona a su abogado y el secreto de la comunicación entre ambos, el mantenimiento del secreto de la información recibida por los abogados en las relaciones profesionales con sus clientes, las inmunidades de los abogados y las sanciones que les son aplicables.

"9. Las leyes nacionales deberán garantizar que a nadie le será negado igual acceso a la magistratura, a la actuación como jurado o asesor y a la profesión de abogado, sin distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

/...

"10. En vista de que la formación de personas aptas para desempeñarse como jueces, abogados, intérpretes y otros funcionarios judiciales es de interés público, el Estado deberá subvencionar dicha formación hasta el máximo que permitan los recursos económicos del país de que se trate y hacerlo sin distinción de ninguna especie, tales como por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

"11. La distribución de los tribunales dentro de un país y los movimientos de los jueces que no tienen sede fija, serán determinados con arreglo a la distribución de la población, a reserva de las necesidades especiales de las personas que viven en zonas aisladas.

"12. Deberán adoptarse medidas para eliminar la rigidez y la complejidad innecesarias de los procedimientos judiciales.

"13. En vista de las penalidades ocasionadas por las dilaciones en los procedimientos judiciales, especialmente a las personas pobres, deberán adoptarse medidas apropiadas a las circunstancias imperantes en cada país, para reducir las dilaciones judiciales al mínimo compatible con el derecho del acusado o de las demás partes en los procedimientos judiciales a preparar y presentar adecuadamente su defensa.

"14. Salvo en situaciones de emergencia nacional, los civiles no serán sometidos a la jurisdicción de tribunales militares.

"15. Los juicios en rebeldía en los sistemas jurídicos que los autorizan, no se celebrarán sin dar al acusado las garantías apropiadas, incluida la notificación previa, y sin que se haya dado antes al acusado una oportunidad de hallarse presente en el proceso; en los juicios en rebeldía la representación por un defensor deberá ser obligatoria; a las personas condenadas en rebeldía deberá concedérseles el derecho a la reapertura o a la revisión de su proceso; se prohibirán los juicios en rebeldía por delitos políticos.

"16. Deberán promulgarse leyes nacionales encaminadas a prohibir 4/ al máximo posible las discriminaciones en el ejercicio de la facultad gubernamental de someter a proceso judicial a los sospechados de delitos.

"17. Cuando legalmente un asunto pueda ser juzgado por cualquiera de varios jueces o salas, la asignación del asunto a un juez o sala deberá determinarse por un sistema 5/ basado en el azar.

4/ Se han eliminado las palabras "o limitar".

5/ Se ha eliminado la palabra "mecánico".

"18. A reserva de la posible prioridad de los asuntos en materia penal en los lugares en que los mismos tribunales conocen de asuntos en materia penal y civil, los juicios dispuestos para la vista deberán celebrarse estrictamente en el orden de presentación de los asuntos ante el tribunal.

"19. Las leyes nacionales relacionadas con la competencia de los tribunales deberán permitir el cambio de jurisdicción, a petición del acusado o de otra parte, cuando dicho cambio ofrezca posibilidades de garantizar un juicio imparcial.

"20. Las medidas adoptadas para la protección especial de los menores en los procedimientos judiciales no deberán menoscabar su derecho a la igualdad en la administración de justicia.

"21. En los juicios de personal militar ante tribunales militares se deberán otorgar a la persona acusada las garantías fundamentales de un juicio imparcial establecidas en el principio 1 6/

"22. Las leyes nacionales relativas a la asistencia letrada deberán desarrollarla al máximo compatible con los recursos económicos del país respectivo, con miras a eliminar definitivamente todas las expensas dimanadas de la interposición de una acción o defensa razonables en cualquier procedimiento judicial, ya sea que dichas expensas correspondan a aranceles judiciales, honorarios de abogados, honorarios de testigos expertos, gastos de viaje de los testigos u otros conceptos.

"23. Mediante planes de asistencia letrada o de alguna otra forma deberá garantizarse representación jurídica adecuada a las personas cuyas opiniones políticas puedan resultar una desventaja para ellas en los procedimientos judiciales, de no contar con esa representación.

"24. Los extranjeros 7/ en un país tendrán derecho a la asistencia letrada en la misma medida que los ciudadanos.

"25. Los jueces explicarán a las personas acusadas los derechos procesales fundamentales que les asisten durante el juicio y su derecho de apelación.

"26. Deberá permitirse a los jueces, jurados, asesores, a las personas acusadas a las demás partes en los procedimientos judiciales, a los abogados, testigos e intérpretes hacer una promesa en lugar de prestar juramento en caso de que opongan objeciones al carácter religioso de cualquier fórmula de juramento que se les exija en relación con sus funciones en la administración de justicia.

6/ Se han eliminado las palabras "con la salvedad de que puedan imponerse las limitaciones necesarias al derecho a un juicio público.

7/ Se han eliminado las palabras "que residan en forma permanente".

"27. Cualquiera sea la jurisdicción de los tribunales religiosos que existan en un país, los tribunales civiles deberán suministrar un foro para el arreglo de todas las disputas judiciales. Ninguna persona deberá carecer de tribunal al cual recurrir, por el hecho de no pertenecer a ninguna de las religiones cuyos tribunales tengan competencia exclusiva en el asunto en litigio.

"28. Las leyes nacionales relativas a la libertad provisional con anterioridad al juicio o durante éste deberán estar redactadas de manera que se elimine toda exigencia de garantías pecuniarias y también de manera que la prisión con anterioridad al juicio o durante éste se reduzca al mínimo y se limite en lo posible cualquier ejercicio discriminatorio del poder de conceder la libertad provisional.

"29. Las supuestas confesiones obtenidas bajo la influencia de promesas, engaño, amenazas o uso de la fuerza serán inadmisibles como prueba y la obtención de supuestas confesiones por tales medios configurará delito.

"30. Deberá proporcionarse servicio gratuito de interpretación a todas las personas acusadas y a las demás partes en los procedimientos judiciales si no dominan el idioma empleado en el tribunal.

"31. Deberán adoptarse disposiciones análogas, con carácter gratuito, respecto de las personas acusadas y demás partes en los procedimientos judiciales que sufran impedimentos de fonación o audición.

"32. Las leyes nacionales relacionadas con la publicidad de los procedimientos judiciales deberán estar redactadas de manera tal que prohíban, hasta la decisión final del tribunal, la publicidad perjudicial a las personas acusadas o a las demás partes en los procedimientos judiciales.

"33. Deberá exigirse a los tribunales que al pronunciar su fallo expongan los motivos del mismo.

"34. Las leyes nacionales relativas a las apelaciones ante los tribunales superiores deberán incluir disposiciones sobre apelación por motivos de aplicación discriminatoria de las leyes referentes a jurisdicción y procedimiento, así como del derecho de fondo.

"35. Con miras a eliminar la discriminación originada por la condición jurídica del territorio a que pertenezca una persona, deberá aplicarse plenamente la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960, en que se proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas.

/...

143. Al presentar el proyecto de principios revisado, el Relator Especial recordó que algunos miembros habían tenido dificultades con la palabra "garantías", en la introducción del proyecto de principio No. 1, y que se había sugerido que se redactase nuevamente el principio a fin de eliminar dicha palabra. Para subsanar esas dificultades y también para dejar en claro el pleno alcance de ese proyecto de principio, el Relator propuso que se redactara de otra forma.

144. En el párrafo ii) del proyecto de principio No. 1 el Relator había insertado las palabras "o establecido en virtud de leyes preexistentes" después de las palabras "previamente establecido por la ley", a fin de excluir del alcance de este párrafo tribunales como los de arbitraje que pueden constituirse para tratar de un caso particular, pero a los que no se pueden oponer objeciones por las razones enunciadas en la frase inicial del principio.

145. En el párrafo v) del proyecto de principio No. 1 la mención de "igual derecho" significaba derecho igualmente importante o derecho igualmente válido mas en vista de la confusión que podría causar la inclusión de la palabra "igual", el Relator la había suprimido.

146. Como se sugirió durante el debate, el Relator también había suprimido las palabras "y de los medios" en el párrafo v) del proyecto de principio No. 1.

147. Por las razones sugeridas durante el debate, había redactado de nuevo el párrafo vi) del proyecto de principio No. 1.

148. En el párrafo vii) había sustituido, en la versión inglesa, la expresión "the press or the public" por la expresión "the press and the public", a fin de que el texto coincidiese con el del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

149. Se había planteado la cuestión de si no era excesivamente amplia la excepción, hecha en el párrafo ix) del proyecto de principio No. 1, al derecho a que la decisión sobre la causa sea pública. Sin pretender que deba seguirse necesariamente la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Relator señaló que la redacción de esta excepción se había tomado del párrafo 1 del artículo 14 de dicho Pacto.

150. Algunos miembros habían puesto en duda que el inciso d) del párrafo xi) del proyecto de principio No. 1 debiese incluir las palabras "siempre que el interés de la justicia lo exija". Nuevamente, sin pretender que deba seguirse necesariamente la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Relator señaló que estas palabras provenían del inciso d) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto.

151. Accediendo a una sugerencia hecha durante el debate, el Relator había añadido las palabras "a examinar los documentos de prueba en su contra" en el lugar indicado en el inciso e) del párrafo xi) del proyecto de principio No. 1.

152. El Relator Especial recordó que se había sugerido mencionar en el párrafo xi) del proyecto de principio No. 1 el derecho del acusado, sin discriminación alguna, a una audiencia preliminar dentro de un plazo razonable, a fin de establecer si existe razón suficiente para mantener al acusado en prisión preventiva antes del juicio; no obstante, según el Relator, podría considerarse que esta idea está suficientemente tratada en el párrafo v) del proyecto de principio No. 1.

153. También se había sugerido en el debate que se mencionara el derecho del acusado a que se le conceda libertad bajo fianza, sin discriminación, como procedimiento normal en causas penales. Esa sugerencia podía considerarse incluida en el proyecto de principio No. 28. El principal objeto de ese proyecto de principio era eliminar el requisito de garantías pecuniarias para la libertad provisional hasta que se celebrara el juicio o durante el juicio, pero también establecía que la detención hasta el juicio o durante el mismo debía reducirse al mínimo y que el ejercicio discriminatorio de la facultad de conceder la libertad provisional debía limitarse en lo posible.

154. En vista de que las prácticas nacionales son distintas respecto de la cuestión de si los tribunales pueden establecer sus normas de procedimiento, el Relator Especial había revisado el proyecto de principio No. 2 agregando las palabras "según corresponda, y no por decisiones del Ejecutivo". Esta nueva formulación no obligaría a ningún país a abandonar sus códigos establecidos de procedimiento judicial en favor de un sistema de normas judiciales. También expresaría claramente la intención del principio No. 2 de afirmar que la regulación de los asuntos relacionados con la administración de justicia por medio de disposiciones constitucionales o legislativas o por normas judiciales es preferible a la colocación de dichos asuntos en la esfera de las decisiones del poder ejecutivo.

/...

155. Según una sugerencia formulada en el debate, había cambiado las palabras "normas generales" por "normas básicas generales" en el proyecto de principio No. 3.

156. El Relator Especial explicó que la diferencia que se quería establecer entre los proyectos de principios Nos. 2 y 3 era la siguiente: el objeto del proyecto de principio No. 2 era excluir de la competencia del ejecutivo, en todo lo posible, los asuntos relativos a la administración de justicia, mientras que lo que se deseaba subrayar en el proyecto de principio No. 3 era el requisito de que las normas básicas generales relativas a la administración de justicia se incluyeran en la constitución, allí donde la hubiera.

157. En cuanto a la sugerencia de que se mencionara la opinión filosófica en el proyecto de principio No. 4, el Relator Especial señaló que la enumeración de los tipos de discriminación que aparecía en el proyecto de principio No. 4 y en otras partes se había tomado del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Relator Especial suponía que las palabras "opinión política o de cualquier otra índole" de dicho artículo fueron consideradas por los autores de la Declaración suficientemente amplias para abarcar las opiniones filosóficas.

158. Como varios miembros habían indicado que los proyectos de principios Nos. 6, 7 y 8 requerían simplificación, el Relator Especial dijo que cada cláusula de esos tres principios procedía de alguna sección - a veces bastante extensa - del capítulo IV de su informe sobre los métodos adoptados para combatir la discriminación. Era cierto que esos tres principios abarcaban muchos temas en forma resumida. Sin embargo, sería difícil simplificarlos, salvo que se eliminaran algunas de las materias de leyes y prácticas mencionadas en ellos. No obstante, el Relator Especial creía que todas esas materias de leyes y prácticas eran dignas de inclusión.

159. El Relator Especial creía que la palabra "jurisdicción" era apropiada en el proyecto de principio No. 6, porque si la jurisdicción de un juez se definía de manera exacta y adecuada, el juez estaría más protegido contra las injerencias.

160. En cuanto a la cuestión planteada, en relación con ese proyecto, sobre el significado de la referencia a la "protección contra las influencias indebidas" brindada a los jueces por el derecho penal y a las "sanciones que les son aplicables", el Relator Especial se remitió al material ilustrativo contenido

/...

en los párrafos 215 a 217 y 263 a 268, respectivamente, del capítulo IV de su informe, sobre los métodos adoptados para combatir la discriminación en la administración de justicia. El Relator Especial había intentado aclarar el significado de este proyecto de principio agregando, al final, las palabras "en el caso de que no demuestren independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones".

161. Aunque se había sugerido que el proyecto de principio No. 6 hablara de las "prerrogativas e inmunidades" de los jueces, el Relator Especial seguía pensando, a la luz de los ejemplos dados en los párrafos 213 y 214 del informe, que la expresión "privilegios e inmunidades" era más apropiada.

162. Se había preguntado al Relator Especial, en relación con el proyecto de principio No. 7, qué significaba la referencia a la "protección contra las influencias indebidas" que el derecho penal brindaba a los jurados y asesores y a las "sanciones que les son aplicables". A este respecto llamó la atención sobre los párrafos 295 a 297 y 300 a 302 de su informe, en que se ilustran esas cuestiones. El Relator Especial había tratado de aclarar el significado de este proyecto de principio agregando, al final, las palabras "en el caso de que no demuestren independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones".

163. En relación con el proyecto de principio No. 8, se había preguntado qué significaban las palabras "las circunstancias en las que un abogado en ejercicio puede negarse a aceptar un asunto". El Relator Especial explicó que esas circunstancias se trataban en el párrafo 318 de su informe.

164. Con objeto de suprimir la ambigüedad de la expresión "imparcialidad de los abogados" en el proyecto de principio No. 8, el Relator Especial propuso sustituir en dicho principio las palabras "la independencia e imparcialidad de los abogados que ejercen su profesión ante los tribunales" por las palabras "la independencia de los abogados que ejercen su profesión ante los tribunales y su imparcialidad para prestar sus servicios a los posibles clientes".

165. El Relator Especial dijo que había aceptado la sugerencia de sustituir en el proyecto de principio No. 9 las palabras "las leyes nacionales deberán garantizar que todos tengan igual acceso a" por las palabras "las leyes nacionales deberán garantizar que a nadie le será negado igual acceso a".

/...

166. También lo había convencido el argumento de que, en el proyecto de principio No. 9, las palabras "sin distinción por razón alguna, como la raza ..." debían sustituirse por las palabras "sin distinción por motivos de raza ...".

167. En el proyecto de principio No. 10 añadió las palabras "hasta el máximo que permitan los recursos económicos del país de que se trate" después de las palabras "dicha formación", ya que varios miembros habían señalado que algunos países no se encontraban en una situación económica que les permitiese subvencionar la formación de jueces y otros funcionarios.

168. El Relator Especial dijo que la sugerencia de que en el proyecto de principio No. 10 se estableciera simplemente que, allí donde el Estado subvencione la formación de jueces, abogados e intérpretes, ello se hará sin discriminación, eliminaría del principio No. 10 un elemento que, por varias razones, el propio Relator había querido incluir en él. En primer lugar, el Estado debe hacer desaparecer los obstáculos económicos que en la actualidad impiden a los pobres que, por lo demás, tienen las aptitudes necesarias, llegar a ser jueces, abogados e intérpretes. En segundo lugar, cualquier sistema ampliado de asistencia letrada - y aun más un servicio nacional como el previsto en los párrafos 491 a 512 de su informe - exigiría un mayor número de abogados. La reducción de los retrasos judiciales exigiría en muchas partes un aumento del número de tribunales o de jueces. Por esos motivos era de interés público que el Estado subvencionase la formación de jueces, abogados y funcionarios judiciales en la medida posible.

169. El Relator Especial explicó que había incluido en el proyecto de principio No. 10 una referencia a los intérpretes, porque en el estudio había mencionado que en algunos países la falta de tales intérpretes acarreaba dificultades para las minorías lingüísticas o los extranjeros que no dominaban el idioma del tribunal; además se imponía a los pobres una desventaja económica cuando el particular debía pagar los honorarios del intérprete. Sin embargo, reconoció que en el texto debían mencionarse los "intérpretes y otros funcionarios judiciales".

170. Como se le había preguntado qué relación existía entre el proyecto de principio No. 11 y la igualdad en la administración de justicia, el Relator Especial señaló a la atención de la Subcomisión los párrafos 168 a 170, 396 a 398 y 518 de su informe, de los que se desprendía que el principio No. 11 guardaba relación directa con la prevención de la discriminación basada en la posición económica.

/...

171. Como se le había preguntado qué relación había entre el proyecto de principio No. 12 y la igualdad en la administración de justicia, el Relator Especial contestó que en el párrafo 516 de su informe se indicaba que la evitación de toda rigidez o complejidad innecesaria del procedimiento judicial redundaría especialmente en beneficio de las personas que menos pueden avenirse a las demoras judiciales y a los gastos que éstas ocasionan.

172. Habiéndosele preguntado qué relación tenía el proyecto de principio No. 13 con la igualdad en la administración de justicia, el Relator Especial contestó que en el párrafo 172 de su informe se mostraba que los pobres son menos capaces que otras personas de soportar las consecuencias de la demora judicial; en el párrafo 514 figuraba una enumeración de las causas más comunes de demora y en los párrafos 402 y 403 se analizaban los métodos adoptados para evitar o reducir al mínimo las demoras en los procesos civiles, penales y de otra índole. En el párrafo 515 figuraba otra observación al respecto. A fin de aclarar el significado del principio No. 13, el Relator Especial había agregado al comienzo las siguientes palabras: "En vista de las penalidades ocasionadas por las demoras en los procedimientos judiciales, especialmente a las personas pobres".

173. Como se había indicado que el proyecto de principio No. 13 duplicaba el inciso v) del proyecto de principio No. 1, el Relator Especial manifestó que había una diferencia de acento entre ambos. El objetivo del principio No. 13 era reducir la discriminación basada en la posición económica, en tanto que en el principio No. 1 se enumeraban varios derechos esenciales para la imparcialidad del juicio, de los que todos debían gozar sin discriminación.

174. Se había sugerido que en el proyecto de principio No. 14 las palabras "Salvo en situaciones de emergencia nacional" se suprimieran o se sustituyeran por la frase "Salvo en tiempo de guerra"; el Relator Especial dijo que había decidido retener la redacción original.

175. El Relator Especial había puesto en práctica la sugerencia de insertar en el proyecto de principio No. 15 la frase "en los sistemas jurídicos que los autorizan", después de las palabras iniciales "Los juicios en rebeldía", para reconocer que había sistemas jurídicos que no autorizaban esos juicios.

/...

176. En relación con el proyecto de principio No. 16, el Relator Especial había aceptado la sugerencia de omitir las palabras "o limitar", ya que se había considerado que podrían permitir la continuación de prácticas discriminatorias.

177. En cuanto al proyecto de principio No. 17, el Relator Especial prefería conservar la referencia a la asignación de los asuntos a los jueces o salas por un sistema basado en el azar, en vista de las muchas posibilidades de discriminación que entrañaban otros sistemas. Sin embargo, había suprimido la palabra "mecánico", que podría interpretarse erróneamente.

178. Como algunos miembros estimaban que el proyecto de principio No. 18 era demasiado rígido en la forma en que estaba redactado, el Relator Especial había aceptado la sugerencia de agregar "dispuestos para la vista" después de "los juicios" en la cláusula final del principio. La finalidad de ese principio era, en especial, evitar toda discriminación en el orden de inclusión de las causas en los calendarios de los tribunales, problema que se había examinado en los párrafos 96 y 487 de su informe.

179. El Relator Especial declaró que el proyecto de principio No. 19 tenía por objeto asegurar que la vista de una causa se trasladara a una localidad distinta para garantizar la imparcialidad del juicio, cuando la opinión local pudiera influir sobre el jurado, los testigos o el propio tribunal. La posibilidad de impugnar la actuación de un juez se mencionaba por separado en el proyecto de principio No. 6, donde se hacía referencia a las circunstancias que descalifican a los jueces para conocer de ciertos casos.

180. Se había sugerido que se ampliara el alcance del proyecto de principio No. 20 a fin de asegurar que las medidas de rehabilitación y otros procedimientos utilizados a la luz de la evolución actual de las ciencias sociales no menoscabaran el derecho a la igualdad en la administración de justicia no sólo de los menores, sino también de las personas en general; el Relator Especial no había cambiado la redacción de ese proyecto de principio, ya que ese problema no se trataba en su informe.

/...

181. El Relator Especial había aceptado la sugerencia de suprimir en el proyecto de principio No. 21 las palabras "con la salvedad de que puedan imponerse las limitaciones necesarias al derecho a un juicio público", porque en ellas se daba demasiada importancia al secreto de los juicios de personal militar y porque las limitaciones legítimas del derecho a un juicio público ya quedaban establecidas en el inciso vii) del principio No. 1.

182. El Relator Especial había decidido no modificar el proyecto de principio No. 22 porque representaba en forma condensada las consecuencias de ciertos cambios de los fundamentos de la administración de justicia que, según su informe, se estaban produciendo. Esos cambios y sus consecuencias se habían examinado detenidamente en los párrafos 492 a 513 del informe, que comprendían un análisis de la posibilidad de establecer servicios nacionales de asistencia letrada semejantes a los de asistencia médica que existen en ciertos países, y un examen de los problemas que se plantean a ese respecto.

183. No estaba convencido de que el proyecto de principio No. 23 pudiese causar discriminación a favor de ciertas personas por razones de opinión política en materia de acceso a la asistencia letrada, y había dejado sin modificación ese proyecto de principio.

184. Había aceptado la sugerencia de suprimir las palabras "que residan en forma permanente" en el proyecto de principio No. 24.

185. Como se había afirmado que la aplicación del proyecto de principio No. 28, incluida la abolición de la fianza, significaría, en la práctica, que permanecerían detenidos más acusados de los que habría sin esa disposición, el Relator Especial señaló a la atención de la Subcomisión el párrafo 519 de su informe, en el que se exponen veinte normas, cada una de las cuales resulta aplicable en diversas partes del mundo y que en combinaciones diversas podrían adoptarse como sustituto de la imposición de garantías pecuniarias.

186. Se había sugerido que el proyecto de principio No. 33 comprendiese una referencia a las opiniones disidentes. El Relator Especial consideraba que la palabra "fallo" podía interpretarse en un sentido que abarcase esas opiniones disidentes. Aun en el caso de que no las comprendiera, el Relator Especial estimaba que el fallo del tribunal en conjunto era lo que importaba para evitar la discriminación, por las razones indicadas en el párrafo 477 de su informe.

/...

187. Había aceptado la sugerencia de agregar, al final del proyecto de principio No. 35, la expresión "en que se proclama la necesidad de poner fin al colonialismo en todas sus formas".

188. El Relator Especial recordó que se había sugerido que en el proyecto de principio No. 35 se hiciera referencia concreta a una propuesta de establecer un tribunal internacional para juzgar los delitos de las personas que ejercen la autoridad de facto en Namibia. Esta cuestión no se había abordado en su informe y, no podía expresar una opinión al respecto en su calidad de Relator Especial.

189. También se había sugerido suprimir el último párrafo del preámbulo del proyecto de principios, ya que la aprobación de instrumentos internacionales no depende de la existencia de una suficiente experiencia nacional pertinente. El Relator Especial no estaba convencido de que ésa fuera una razón suficiente para suprimir dicho párrafo del preámbulo, que constituía tan sólo una referencia indirecta al hecho de que se había realizado el estudio de la igualdad en la administración de justicia y de que se había utilizado la experiencia nacional allí descrita para preparar el proyecto de principios.

190. El Relator Especial encareció que cualquier instrumento o instrumentos internacionales, basados en el proyecto de principios en particular, se redactara, a la luz del material contenido en los capítulos IV y V de su estudio, ya que esos capítulos contenían otros detalles que se necesitarían especialmente para la redacción de una convención o de convenciones y que, con objeto de mantener una brevedad razonable, no habían podido incluirse en el proyecto de principios.

Examen del proyecto de resolución

191. En la 576a. sesión de la Subcomisión el Sr. Capotorti, el Sr. Carey y el Sr. Nettel presentaron un proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.518) que decía:

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Habiendo considerado el informe definitivo (E/CN.4/Sub.2/296) sobre el estudio de la igualdad en la administración de justicia, presentado por el Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat,

/...

"1. Expresa su profundo reconocimiento al Relator Especial por su valioso trabajo sobre el estudio y lo felicita calurosamente por su informe definitivo;

"2. Expresa su gratitud a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados, a los organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales interesadas, por la colaboración que han prestado facilitando información para el estudio;

"3. Expresa su agradecimiento al Secretario General por la colaboración que prestó al Relator Especial en la preparación del estudio;

"4. Transmite el informe del Relator Especial a la Comisión de Derechos Humanos para que ésta lo examine tan pronto como sea posible;

"5. Transmite también a la Comisión el proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia anexo a la presente resolución;

"6. Invita a la Comisión de Derechos Humanos a que examine ese proyecto de principios con miras a hacer recomendaciones al Consejo Económico y Social acerca de la forma y el contenido de un instrumento internacional o de varios instrumentos internacionales sobre la igualdad en la administración de justicia;

"7. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que recomiende al Consejo Económico y Social la aprobación del siguiente proyecto de resolución:

"El Consejo Económico y Social,

"Teniendo en cuenta la contribución singular hecha por el estudio de la igualdad en la administración de justicia (E/CN.4/Sub.2/296) presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.º período de sesiones por su Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat,

"1. Expresa su agradecimiento al Sr. Abu Rannat por su valioso estudio;

"2. Pide al Secretario General que haga imprimir el estudio del Relator Especial y le dé la distribución más amplia posible;

"3. Pide al Secretario General que adopte medidas para que el Sr. Abu Rannat asista a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando ésta examine su informe y el proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.º período de sesiones."

/...

"ANEXO

"Proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia

"[Aquí se insertará el proyecto de principios que apruebe la Subcomisión.]"

192. En la misma sesión el Sr. Rybakov presentó enmiendas (E/CN.4/Sub.2/L.526) al proyecto de resolución. Esas enmiendas eran las siguientes:

"Párrafo 4

"1. Entre las palabras "... del Relator Especial ..." y las palabras "a la Comisión de Derechos Humanos" insértese las palabras "en que se incorpora el proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia".

"Párrafos 5 y 6

"2. Suprímense los párrafos.

"Párrafo 7 (párrafo 2 del proyecto de resolución del Consejo Económico y Social)

"3. Entre las palabras "del Relator Especial" y "y le dé la distribución más amplia posible" insértese las palabras "en que se incorpora el proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia".

"Párrafo 7 (párrafo 3 del proyecto de resolución del Consejo Económico y Social)

"4. Suprímense las palabras "... aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.º período de sesiones".

"5. Después de las palabras "... su informe ..." reemplácese la palabra "y" por las palabras "... en que se incorpora ...".

193. El Representante del Secretario General señaló a la atención de la Subcomisión el documento E/CN.4/Sub.2/L.520, que contenía la exposición sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución E/CN.4/Sub.2/L.518.

194. Los miembros de la Subcomisión no hallaron dificultades en hacer suyo el proyecto de resolución en lo que respectaba al informe sobre el estudio de la igualdad en la administración de justicia, considerado independientemente de la cuestión del proyecto de principios. Luego de un debate sobre el procedimiento que debía seguirse, se acordó, sin embargo, que la Subcomisión no tenía tiempo

/...

suficiente para debatir y poner a votación el proyecto de principios, a pesar de que el Relator Especial había aligerado su tarea al revisar dicho proyecto a la luz de las deliberaciones de la Subcomisión. Se señalaron a la atención las muchas y complejas cuestiones a que daban lugar los principios, la diversidad de sistemas jurídicos que en ellos debían tenerse en cuenta y la necesidad de que la Subcomisión prosiguiese sus tareas de investigación y reflexión para examinarlos adecuadamente.

195. Se debatieron dos procedimientos. Según el primero, la Subcomisión remitiría el proyecto de principios y el informe a la Comisión de Derechos Humanos, en el entendimiento de que el Relator Especial asumiría la responsabilidad tanto por el informe como por los principios. Se pensó que sería posible que la Comisión de Derechos Humanos decidiese qué principios del proyecto se prestaban a ser incluidos en una convención y qué otros en una declaración, y remitiese los principios a la Subcomisión junto con directrices sobre el futuro curso de acción de la Subcomisión en la materia.

196. Según el otro procedimiento, la Subcomisión aplazaría hasta su 23.^o período de sesiones el debate sobre el proyecto de principios; entretanto remitiría el informe a la Comisión de Derechos Humanos, juntamente con una solicitud de que recomendase al Consejo que pidiese al Secretario General la publicación del estudio. Se recalcó que toda demora en la impresión del estudio le haría perder actualidad innecesariamente.

197. Como resultado de este cambio de opiniones, el Sr. Capotorti, hablando también en nombre de los coautores del proyecto de resolución contenido en el documento E/CN.4/Sub.2/L.518, presentó las siguientes enmiendas verbales al proyecto de resolución: a) Sustituir los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva por el siguiente: "5. Decide terminar en su próximo período de sesiones el examen de los principios contenidos en el Estudio de la Igualdad en la Administración de Justicia, presentados por el Relator Especial." b) Suprimir del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución sometida a la aprobación del Consejo Económico y Social las palabras "y el proyecto de principios sobre la igualdad en la administración de justicia aprobado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.^o período de sesiones".

/...

198. A la luz de esta revisión verbal del proyecto de resolución, el Sr. Abu Rannat retiró su propuesta de que la Subcomisión aprobara el proyecto de principios revisado que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/L.528, y el Sr. Rybakov retiró las enmiendas contenidas en el documento E/CN.4/Sub.2/L.526.

Aprobación de la resolución

199. Por unanimidad quedaron aprobados, en la parte dispositiva, los párrafos 1 a 4 y el nuevo párrafo 5 del proyecto de resolución E/CN.4/Sub.2/L.518.

200. Por 15 votos contra ninguno y 2 abstenciones quedó aprobado el párrafo 7 original de la parte dispositiva (ahora párrafo 6) del proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas verbalmente.

201. Por 16 votos contra ninguno y 1 abstención quedó aprobada la resolución en conjunto.

202. El texto de la resolución 3 (XXII) aprobada en la 576a. sesión, celebrada el 9 de septiembre de 1969, es el siguiente:

Resolución 3 (XXII)

ESTUDIO DE LA IGUALDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Habiendo considerado el informe definitivo (E/CN.4/Sub.2/296) sobre el estudio
de la igualdad en la administración de justicia presentado por el Relator Especial,
Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat,

1. Expresa su profundo reconocimiento al Relator Especial por su valioso trabajo sobre el estudio y lo felicita calurosamente por su informe definitivo;

2. Expresa su gratitud a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados, a los organismos especializados y a las organizaciones no gubernamentales interesadas, por la colaboración que han prestado facilitando información para el estudio;

3. Expresa su agradecimiento al Secretario General por la colaboración que prestó al Relator Especial en la preparación del estudio;

4. Transmite el informe del Relator Especial a la Comisión de Derechos Humanos para que ésta lo examine tan pronto como sea posible;

/...

5. Decide terminar en su próximo período de sesiones el examen de los principios contenidos en el Estudio de la Igualdad en la Administración de Justicia, presentados por el Relator Especial;

6. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que recomiende al Consejo Económico y Social la aprobación del siguiente proyecto de resolución:

"El Consejo Económico y Social,

Teniendo en cuenta la contribución singular hecha por el estudio de la igualdad en la administración de justicia (E/CN.4/Sub.2/296) presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.^o período de sesiones por su Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat,

1. Expresa su agradecimiento al Sr. Abu Rannat por su valioso estudio;
2. Pide al Secretario General que haga imprimir el estudio del Relator Especial y le dé la distribución más amplia posible;
3. Pide al Secretario General que adopte medidas para que el Sr. Abu Rannat asista a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando ésta examine su informe."

/...

IV. CUESTION DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE ESCLAVOS EN TODAS
SUS PRACTICAS Y MANIFESTACIONES, INCLUIDAS LAS PRACTICAS
ESCLAVIZADORAS DEL APARTHEID Y DEL COLONIALISMO

(Tema 5 del programa)

203. En sus sesiones 575a. y 577a., la Subcomisión examinó el tema 5 de su programa.

204. La Subcomisión tuvo ante sí los siguientes documentos: a) el informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/304) presentado por el Relator Especial, Sr. Mohamed Awad, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo Económico y Social 1330 (XLIV), de 31 de mayo de 1968, y 1419 (XLVI), de 9 de junio de 1969; y b) una nota del Secretario General (E/CN.4/Sub.2/300 y Corr.1 y Add.1 a 3) en donde figuraban: i) la información adicional recibida por el Secretario General en respuesta al Cuestionario sobre la Esclavitud; ii) la información recibida sobre las medidas que podrían adoptarse para aplicar la Convención Internacional sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (inciso a)) del párrafo 2 de la resolución 1331 (XLIV) del Consejo Económico y Social); iii) la información recibida sobre la protección que se daba a todas las personas que escapaban de la esclavitud y de las prácticas del apartheid y del colonialismo análogas a la esclavitud en cualquiera de sus formas (párrafo 5 de la resolución 1331 (XLIV) del Consejo Económico y Social); iv) la información recibida acerca de las posibilidades de cooperación policial internacional para interceptar y castigar el transporte de personas en peligro de ser esclavizadas (párrafo 2 de la resolución 7 (XXI) de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías); y v) la lista de expertos en economía, sociología, derecho y otras disciplinas pertinentes a cuyo asesoramiento podían recurrir los Estados interesados en la liquidación de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo (párrafo 3 de la resolución 1330 (XLIV) del Consejo Económico y Social).

205. En la 575a. sesión el Relator Especial presentó su informe preliminar.

206. En la misma sesión hizo una declaración el observador de la Liga contra la Esclavitud.

/...

207. Los miembros de la Subcomisión condenaron unánimemente la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluida las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo. Se recordó que muchísimos órganos de las Naciones Unidas, entre ellos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos se habrían ocupado de la eliminación del apartheid y el colonialismo, mientras que la esclavitud está incluida directamente en la esfera de competencia de la Subcomisión, órgano que, en relación con este tema tiene un deber especial.

208. Se señaló que si bien el apartheid, estaba circunscrito a una zona geográfica bastante limitada, era la causa de los sufrimientos de unos 17 millones de personas. El apartheid venía preocupando a las Naciones Unidas desde el mismo comienzo de sus actividades. La política racial del Gobierno de Sudáfrica, y en especial su política de apartheid, había sido objeto de deliberaciones no sólo en los órganos principales y auxiliares de las Naciones Unidas sino también en diversos órganos especiales creados para ocuparse de este problema, como por ejemplo, el Comité Especial encargado de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica. Un orador describió las medidas que ya habían tomado los órganos internacionales, incluida la aplicación de sanciones económicas para obligar a la República de Sudáfrica a cesar en su política de apartheid. Se señaló que, aunque Sudáfrica no se vería afectada inmediatamente por medidas económicas, no era inmune a los perjuicios derivados de éstas, habida cuenta de su comercio exterior y de sus inversiones. Se señaló que para eliminar el peor de los males humanos, la política de apartheid, los principales órganos de las Naciones Unidas debían adoptar medidas políticas y educativas. Estas últimas podrían incluir seminarios sobre apartheid y el Programa de enseñanza y capacitación de las Naciones Unidas que, con la colaboración de los organismos especializados competentes, estaba destinado a hacer que personas de Sudáfrica pudieran prepararse para ser abogados, ingenieros, agrónomos, funcionarios públicos, maestros, o trabajadores especializados. Además, se subrayó que los diferentes órganos que se ocupaban del apartheid debían coordinar sus actividades para obtener la completa eliminación de este mal.

209. Algunos oradores sugirieron que, en su trabajo, el Relator Especial se ocupase no sólo de las formas clásicas de la esclavitud sino también de las contemporáneas, tales como las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo.

/...

Se sugirió que se efectuara un estudio sobre el carácter contemporáneo de la esclavitud en todas sus formas, en el que se aludiera concretamente a las regiones en que todavía persistían esas prácticas. Otros, en cambio, opinaron que la cuestión de la esclavitud recibiría insuficiente atención en un estudio combinado. Se indicó que el apartheid afectaba a mucha más gente que la esclavitud, y que era un problema mucho más grave. Además, el apartheid era defendido y practicado por ciertos gobiernos y se trataba de obligar a éstos a modificar su política, mientras que ningún gobierno aprobaba la esclavitud, y el problema consistía en ayudar a algunos gobiernos a eliminarla de sus territorios.

210. Se señaló que la esclavitud era ilegal en la mayor parte de los Estados. Sin embargo, todavía existían algunas formas de este mal porque en algunos países resultaba difícil aplicar las leyes al respecto. Algunos oradores destacaron que, con formas modernas, aun subsistían la esclavitud y ciertas prácticas afines a la esclavitud.

211. Se reconoció en general que en la esclavitud había un aspecto económico importante, pues los esclavos, aunque no podían hacerse oír, eran posesiones valiosas. Por ello, algunos oradores solicitaron que se aumentara la ayuda financiera de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para combatir a la esclavitud y aliviar la situación de sus víctimas.

212. Un orador señaló que se había demostrado de manera concluyente la existencia de la esclavitud y de la trata de esclavos y que el Relator Especial debía empezar ya a preparar un estudio a fondo de las medidas prácticas que podían adoptarse para liquidar totalmente la esclavitud en todas sus manifestaciones.

213. En cuanto a la eliminación de la esclavitud se señaló especialmente la existencia de los siguientes documentos: a) Convención Internacional sobre la Esclavitud, de 1926; b) Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud; c) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 8 prohibía la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas y cuyos artículos 28 a 45 disponían un procedimiento de aplicación y d) el Cuestionario sobre la Esclavitud y en particular su décimotercera pregunta, relativa a la asistencia y la cooperación jurídica, técnica, administrativa, financiera o de otro tipo necesarias para eliminar o reducir las condiciones que favorecían la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.

Sin embargo, el Pacto todavía no había entrado en vigor, no se había recibido respuesta al Cuestionario de 29 Estados Miembros de las Naciones Unidas (E/CN.4/Sub.2/304/párr. 21).

214. Algunos oradores señalaron que la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud sólo podían ser vencidas mediante la transformación gradual y fundamental de la estructura social y económica de las comunidades en que todavía existían. A su juicio, debía suministrarse ayuda al desarrollo bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En particular, debían facilitarse fondos de asistencia técnica para aliviar la situación de las víctimas de la esclavitud. Además, todos los organismos especializados debían colaborar en la concesión de ayuda para mejorar los niveles de vida, con el fin de eliminar la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Se destacó que la asistencia con tal fin debía encauzarse por conducto del Programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos (por ejemplo, mediante la concesión de becas y la celebración de seminarios) y por medio del suministro de expertos en economía, sociología, derecho y otras disciplinas pertinentes, cuyo concurso se facilitaría a los Estados interesados en la liquidación de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y el colonialismo. A juicio de un orador, se debía prestar especial atención a la educación y al empleo de los esclavos después de ser emancipados, porque para los emancipados la libertad resultaría peor que inútil si no se adoptaran de antemano las medidas necesarias para su rehabilitación efectiva.

215. Un orador sugirió que se atribuyese a las organizaciones regionales dotadas de órganos competentes el cometido de combatir la trata de esclavos. La Liga de los Estados Arabes y su Organización de defensa social contra el delito, que contaban con una oficina de investigación policial, podían ser utilizadas con provecho para esa lucha en el plano regional.

216. Se subrayó que la cooperación de la policía internacional sólo podía reducir sensiblemente el tráfico a través de las fronteras de personas en peligro de ser esclavizadas cuando existiera un mecanismo adecuado internacional en funcionamiento constante. Con tal fin, podrían adoptarse para la supresión del tráfico clandestino de esclavos algunas de las técnicas aplicadas con éxito en la represión del tráfico ilícito de estupefacientes.

/...

217. Dos oradores encarecieron que se diera apoyo financiero para la labor del Relator Especial con el fin de que éste pudiera visitar los organismos especializados, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Ginebra. Se sugirió que se alentase asimismo al Relator Especial a que visitara ciertas regiones del mundo para reunir información más precisa, y visitara determinados países y les informara de la posibilidad de disponer de fondos de asistencia de las Naciones Unidas y los organismos especializados.

Aprobación de la resolución

218. En la 577a. sesión de la Subcomisión, los Sres. Calvocoressi, Capotorti, Carey, Durlong, Gros Espiell, Juvigny, Martínez Cobo y Ruhashyankiko presentaron un proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/529/Rev.1) que decía lo siguiente:

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías ,

"Habiendo examinando la información sobre la cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo, presentada por el Secretario General de conformidad con la resolución 7 (XXI) de la Subcomisión y las resoluciones 1330 (XLIV), y 1331 (XLIV) del Consejo Económico y Social (E/CN.4/Sub.2/300),

"Habiendo examinado también el informe preliminar sobre la misma cuestión preparado por su Relator Especial, Sr. Mohamed Awad (E/CN.4/Sub.2/304),

"1. Expresa su reconocimiento al Relator Especial por su valioso informe, y le pide que proceda, tan pronto como sea posible, a la realización de un estudio de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la resolución 1330 (XLIV) del Consejo Económico y Social, confirmado por el Consejo en su resolución 1419 (XLIV), y que presente a la Subcomisión, en su 23.º período de sesiones, un informe sobre la marcha de los trabajos, teniendo en cuenta el examen del informe preliminar realizado en el 22.º período de sesiones de la Subcomisión;

"2. Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que el Relator Especial celebre consultas con las autoridades pertinentes de la Comisión de Estupefacientes, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y otras organizaciones internacionales competentes, con miras a obtener la información que requiera la preparación de su estudio;

/...

"3. Pide al Secretario General que transmita a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados la lista de expertos en economía, sociología, derecho y otras disciplinas pertinentes a cuyo asesoramiento pueden recurrir los Estados interesados en la eliminación de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo (E/CN.4/Sub.2/300, anexo V), y que recuerde a dichos gobiernos que pueden disponer, si así lo solicitan, de asistencia técnica para combatir tales prácticas y manifestaciones;

"4. Pide además al Secretario General que invite a los gobiernos de los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a contestar al cuestionario sobre la esclavitud cuanto antes a fin de facilitar una evaluación final por el Relator Especial del carácter y el grado de difusión de la esclavitud, la trata de esclavos y las prácticas análogas a la esclavitud que subsisten actualmente, y la planificación definitiva de la aplicación de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956."

219. En la misma sesión, el Sr. Waldron-Ramsey presentó una enmienda (E/CN.4/Sub.2/L.532) que contenía dos nuevos párrafos que se agregarían después del párrafo 1 del proyecto de resolución:

"1. Pide al Relator Especial que incluya en su estudio las manifestaciones de prácticas esclavizadoras afines al apartheid que existen en Rhodesia del Sur y Namibia, especialmente las prácticas de trabajos forzados y de agotamiento de la mano de obra africana y el desconocimiento total de los derechos sindicales de los africanos de esos territorios;

"2. Invita al Relator Especial a que tenga en cuenta las conclusiones de los informes que aparecen en los documentos E/CN.4/950, E/CN.4/984 y Add.1 a 19 y E/4646 del Grupo Especial de Expertos en cuanto a los malos tratos de presos en Rhodesia del Sur, Sudáfrica, Namibia y territorios portugueses de África y a la violación de los derechos sindicales en Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Namibia."

220. Después de un debate, el Sr. Calvocoressi, el Sr. Capotorti, el Sr. Carey Díaz Samaya, el Sr. Durlong, el Sr. Gros Espiell, el Sr. Humphrey, el Sr. Juvigny, el Sr. Piñera, el Sr. Ruhashyankiko y el Sr. Yango presentaron verbalmente un proyecto de resolución revisado que patrocinaban conjuntamente.

221. En la 577a. sesión de la Subcomisión, el representante del Secretario General hizo una declaración sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.533).

/...

222. El proyecto de resolución enmendado fue aprobado por 22 votos contra ninguno y ninguna abstención.

223. El texto de la resolución, que aprobó la Subcomisión en su 577a. sesión, celebrada el 10 de septiembre de 1969, decía lo siguiente:

Resolución 4 (XXII)

CUESTION DE LA ESCLAVITUD Y LA TRATA DE ESCLAVOS EN TODAS
SUS PRACTICAS Y MANIFESTACIONES, INCLUIDAS LAS PRACTICAS
ESCLAVIZADORAS DEL APARTHEID Y DEL COLONIALISMO

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Habiendo examinado la información sobre la cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo, presentada por el Secretario General de conformidad con la resolución 7 (XXI) de la Subcomisión y las resoluciones 1330 (XLIV) y 1331 (XLIV) del Consejo Económico y Social (E/CN.4/Sub.2/300),

Habiendo examinado también el informe preliminar sobre la misma cuestión preparado por su Relator Especial, Sr. Mohamed Awad (E/CN.4/Sub.2/304),

1. Expresa su reconocimiento al Relator Especial por su valioso informe, y le pide que proceda, tan pronto como sea posible, a la realización de un estudio de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de la resolución 1330 (XLIV) del Consejo Económico y Social, confirmado por el Consejo en su resolución 1419 (XLVI), y que presente a la Subcomisión, en su 23.º período de sesiones, un informe sobre la marcha de los trabajos y propuestas concretas de acción, teniendo en cuenta el examen del informe preliminar realizado en el 22.º período de sesiones de la Subcomisión;

2. Pide al Relator Especial que incluya en su estudio medidas para luchar contra las manifestaciones de prácticas esclavizadoras afines al apartheid que existen en Rhodesia del Sur y Namibia, especialmente las prácticas de trabajos forzados y de agotamiento de la mano de obra africana y el desconocimiento total de los derechos sindicales de los africanos de esos territorios;

3. Invita al Relator Especial a que tenga en cuenta las conclusiones de los informes que aparecen en los documentos E/CN.4/950, E/CN.4/984 y Add.1 a 19 y E/4646 del Grupo Especial de Expertos en cuanto a los malos tratos de presos en Rhodesia del Sur, Sudáfrica, Namibia y territorios portugueses de Africa y a la violación de los derechos sindicales en Rhodesia del Sur, Sudáfrica y Namibia;

/...

4. Invita asimismo al Relator Especial a que tenga en cuenta la labor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad sindical, y trabajo forzoso;

5. Pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que el Relator Especial celebre consultas con las autoridades pertinentes de la Comisión de Estupefacientes, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras organizaciones internacionales y regionales competentes, con miras a obtener la información que requiera la preparación de su estudio y colaboración de otro tipo para eliminar los abusos que se están examinando;

6. Pide al Secretario General que transmita a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados la lista de expertos en economía, sociología, derecho y otras disciplinas pertinentes a cuyo asesoramiento pueden recurrir los Estados interesados en la eliminación de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo (E/CN.4/Sub.2/300, anexo V), y que recuerde a dichos gobiernos que pueden disponer, si así lo solicitan, de asistencia técnica para combatir tales prácticas y manifestaciones;

7. Pide además al Secretario General que a) invite a los gobiernos de los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a contestar al cuestionario sobre la esclavitud cuanto antes a fin de facilitar una evaluación final por el Relator Especial del carácter y el grado de difusión de la esclavitud, la trata de esclavos y las prácticas análogas a la esclavitud que subsisten actualmente, y la planificación definitiva de la aplicación de la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y la Convención Suplementaria de 1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956 y b) invite a los gobiernos de todos los Estados partes en la Convención Suplementaria a que faciliten al Secretario General la información que se pide en el párrafo 2 del artículo 8 de esta Convención, o a que, en el caso de los Estados partes que en vista de sus leyes, reglamentos o medidas administrativas actuales, no hayan considerado necesario promulgar o poner en vigor leyes, reglamentos o medidas administrativas nuevos para aplicar las disposiciones de la Convención, informen al Secretario General en este sentido.

V. CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES, INCLUSO LAS POLITICAS DE DISCRIMINACION RACIAL Y SEGREGACION Y DE APARTHEID, EN TODOS LOS PAISES Y EN PARTICULAR EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

(Tema 6 del programa)

224. En sus 578a. y 579a. sesiones, la Subcomisión examinó el tema 6 de su programa.

225. El Sr. Carey presentó a la Subcomisión el siguiente proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.527):

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Teniendo presente la resolución 2144 (XXI) de la Asamblea General, del 26 de octubre de 1966, en la que se invita al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos a examinar con carácter de urgencia el modo de reforzar los medios de que las Naciones Unidas disponen para poner término a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurren,

"Habiendo recibido la petición de la Comisión de Derechos Humanos, formulada en su resolución 8 (XXIII) del 16 d. marzo de 1967, de preparar, para uso de la Comisión, un informe que incluya información sobre violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales procedente de todas las fuentes disponibles; y habiendo sido invitada por la Comisión, por la misma resolución, a poner en conocimiento de la Comisión toda situación respecto de la cual la Subcomisión tenga motivos razonables para creer que revela un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales,

"Habiendo sido autorizada por el Consejo Económico y Social, en la resolución 1235 (XLII) d 16 de junio de 1967, a examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en Namibia, territorio bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas e ilegalmente ocupado en la actualidad por el Gobierno de la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur, información que figura en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social, del 30 de julio de 1959,

"Habiendo examinado la información contenida en esas comunicaciones,

"Tomando nota de que el Comité Especial encargado de Estudiar la Política de Apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica, el Consejo de las

/...

Naciones Unidas para Namibia y el Comité Especial encargado de estudiar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y el Grupo de Expertos creado por la Comisión de Derechos Humanos están tratando cuestiones de violaciones notorias de derechos humanos y libertades fundamentales en la República de Sudáfrica, Namibia, Rhodesia del Sur, los territorios bajo administración portuguesa y los territorios ocupados del Oriente Medio,

"Habiendo examinado el informe^{8/} del grupo de trabajo integrado por el Sr. Abu Rannat, el Sr. Humphrey y el Sr. Martínez Báez, preparado de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 2 (XXI) de la Subcomisión,

"1. Expresa su gratitud al Sr. Abu Rannat, al Sr. Humphrey y al Sr. Martínez Báez por su amplio informe;

"2. Decide, hasta que el Consejo Económico y Social tome una decisión sobre las recomendaciones relativas al procedimiento para tratar las comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales presentadas por la Subcomisión en la resolución 2 (XXI), transmitida con enmiendas al Consejo por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 17 (XXV) y remitida por el Consejo mediante su resolución 1422 (XLVI) a los Estados Miembros para que las examinen y formulen observaciones sobre ellas, pedir al grupo de trabajo formado por tres de sus miembros, nombrado en su 554a. sesión, que siga examinando tales comunicaciones antes de los períodos de sesiones 23º y siguientes de la Subcomisión. Si un miembro del grupo de trabajo considera que algunas comunicaciones revelan un cuadro persistente de violaciones notorias de derechos humanos, el grupo señalará la cuestión a la Subcomisión, la que decidirá si debe señalar las situaciones reveladas por tales comunicaciones a la atención de la Comisión de Derechos Humanos;

"3. Señala a la atención de la Comisión, de conformidad con la resolución 8 (XXIII) de la Comisión y con la resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social, las situaciones descritas en las siguientes comunicaciones, con respecto a las cuales la Subcomisión tiene motivos razonables para creer que revelan un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales:

[Aquí se insertarán los números de orden, sin mencionar el país a que se refieren, de las comunicaciones mencionadas y de otros documentos que la Subcomisión decida incluir, y se señalará además si se ha recibido una respuesta del gobierno afectado, sin mencionar tampoco en este caso el nombre del gobierno ni revelar de otro modo su identidad.]"

Posteriormente el Sr. Carey presentó una adición revisada (E/CN.4/Sub.2/L.527/Add.1/Rev.1) a su proyecto de resolución:

8/ Publicado como documento de distribución reservada.

"Al final del párrafo 3 de la parte dispositiva substitúyase el texto entre corchetes por lo siguiente:

Torturas y asesinatos

21.035; 22.745; 23.594; 23.842; 23.920; 24.094; 24.185; A/7500-S/8961.

Malos tratos a mujeres y niños

22.471; 23.582; 23.592; 23.594; 23.596; 23.822; 23.988; 24.070; 24.121.

Malos tratos a la población civil en conflictos armados

21.048; 22.800; 23.820; 23.594.

Violaciones del derecho a salir de cualquier país y a regresar al propio

22.802; 23.593; 23.594; 23.623; 23.820; 23.945; 23.951; 24.185.

Discriminación racial y religiosa

22.802; 23.568; 23.623; 23.915; 23.954; 23.993; 24.134; 24.169; 24.196; 24.220; A/7104-S/8610.

Violaciones de la libertad de expresión

20.873; 22.741; 23.592; 23.596; 23.598; 23.897; 23.942; 24.201; 24.208; 24.304; 24.305; 24.332; 24.394."

226. Al examinar el proceso legislativo sobre la cuestión, algunos miembros hicieron mención de: a) la resolución 2144 (XXI) de la Asamblea General, de 22 de octubre de 1966, en la cual la Asamblea invitaba al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos a examinar con carácter de urgencia el modo de reforzar los medios de que las Naciones Unidas disponen para poner término a las violaciones de los derechos humanos dondequiera que ocurran; b) la resolución 8 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos en la cual la Comisión decidía ocuparse todos los años de la cuestión de las violaciones de los derechos humanos; pedía al Consejo Económico y Social que autorizara a la Comisión a examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tales como el apartheid en todas sus formas y manifestaciones, incluida en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo Económico y Social, de

/...

30 de julio de 1959, e invitaba a la Subcomisión a poner en conocimiento de la Comisión toda situación respecto de la cual tuviera motivos razonables para creer que revelaba un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier país, incluso la política de discriminación y de segregación y la política de apartheid, en particular en los territorios coloniales y otros territorios dependientes y pedía a la Subcomisión que preparase para la Comisión, a fin de que ésta pudiese utilizarlo, un informe que incluyera información sobre violaciones de los derechos humanos, libertades fundamentales procedente de todas las fuentes disponibles; y c) la resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social, del 6 de junio de 1967, en la cual el Consejo suscribía la resolución 8 (XXIII) de la Comisión y autorizaba a la Comisión y a la Subcomisión a examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los derechos humanos y las libertades fundamentales que ilustran la política de apartheid y la discriminación racial, información que figuraba en las comunicaciones consignadas en la lista preparada por el Secretario General de conformidad con la resolución 728 (XVIII) del Consejo Económico y Social.

227. Varios miembros declararon que el proyecto de resolución presentado por el Sr. Carey, no guardaba relación con el problema de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sino con el problema especial del procedimiento para atender las reclamaciones de particulares contra gobiernos, que no figuraba en el programa de la Subcomisión de ese período de sesiones. Esos miembros señalaron que los intentos de reemplazar la cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales por la cuestión del procedimiento para atender las reclamaciones de particulares contra gobiernos estaban encaminados a desviar la atención de la Subcomisión de la serie de problemas relacionados con violaciones notorias de los derechos humanos tales como la discriminación y la segregación raciales y el apartheid. También recalcaron que esos intentos tenían por objeto establecer ilegalmente mecanismos para interferir en los asuntos internos de Estados soberanos, valiéndose de diversas clases de declaraciones difamatorias de particulares, y de las insinuaciones de ciertas organizaciones gubernamentales financiadas por fuentes viciadas. Indicaron que, a la luz de la resolución 1422 (XLVI) del Consejo Económico y Social no sería apropiado tomar en el presente período de sesiones otras medidas acerca del procedimiento para atender las reclamaciones de particulares. También se mencionaron en particular la resolución 17 (XXV)

/...

de la Comisión de Derechos Humanos y la resolución 1422 (XLVI) del Consejo Económico y Social en relación con la cuestión de si el Grupo de Trabajo, nombrado con arreglo a la resolución 2 (XXI) de la Subcomisión para examinar comunicaciones recibidas por el Secretario General según la resolución 728 F (XXVIII) del Consejo, debía continuar su labor. Algunos miembros elogiaron al Grupo por el informe que había presentado a la Subcomisión. Sin embargo, otros estimaron que el Grupo de Trabajo debía cesar sus funciones provisionalmente en vista de que, según la resolución 1422 (XLVI) del Consejo, la resolución de la Comisión que hacía suya la resolución 2 (XXI) de la Subcomisión había sido transmitida a los Estados Miembros para que la consideraran y formularan comentarios al respecto. Al mismo tiempo, se recalcó que se habían planteado serias dudas respecto de la legalidad, la propiedad y la conveniencia de establecer dicho Grupo de Trabajo, ya que sus actividades podían menoscabar el principio de la independencia de los expertos al expresar opiniones acerca de las reclamaciones, y que en el futuro debía dedicarse especial atención a ese hecho.

228. En el debate sobre este tema del programa, se hizo alusión, en algunas declaraciones a hechos relacionados con la flagrante violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Africa meridional, las colonias portuguesas y el Oriente Medio. Algunas delegaciones utilizaron en el debate varias reclamaciones de particulares. La situación de los territorios árabes ocupados por Israel se mencionó en el debate. Citando informes del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente y del Comité Internacional de la Cruz Roja, la resolución aprobada el 24 de julio de 1969 por la 32a. Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras informaciones que poseían, algunos miembros declararon que el Gobierno de Israel estaba cometiendo violaciones notorias, amplias y sistemáticas de los derechos humanos en los territorios ocupados. Estos miembros afirmaron que la política de Israel violaba muchos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular el derecho a regresar al propio país, y los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y particularmente el Convenio relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra. Impugnaron la negativa sistemática del Gobierno de Israel

/...

a cumplir las resoluciones aprobadas por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos. Recordaron, en particular, que el Grupo de Trabajo Especial de Expertos creado por la resolución 6 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos para investigar alegaciones sobre violaciones por Israel del Convenio de Ginebra relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra del 12 de agosto de 1949, en los territorios ocupados por Israel no había podido terminar su tarea en esos territorios porque el Gobierno de Israel se había negado a colaborar. Afirmaron que la destrucción en gran escala de las casas de personas sospechosas de hostilidad al Gobierno de Israel, el arrasamiento de aldeas enteras, las órdenes de deportación en masa, los actos frecuentes de brutalidad, pillaje y depredación contra la población civil eran actos que cometían diariamente las autoridades israelíes en los territorios ocupados. Las políticas de apartheid y de discriminación racial seguidas en Sudáfrica, Rhodesia del Sur y los territorios bajo dominación portuguesa fueron condenadas unánimemente por los oradores. Se señaló que los regímenes racistas del Africa meridional ya se habrían derrumbado si ciertas grandes Potencias no hubieran insistido en mantener relaciones diplomáticas, comerciales, culturales e incluso militares con esos países. También se señaló que, a pesar de las muchas resoluciones de órganos de las Naciones Unidas, las inversiones extranjeras aumentaban con Sudáfrica a ritmo alarmante. Con respecto a Namibia, se dijo que todos los Estados debían tomar medidas enérgicas y ejercer presión sobre el Gobierno de Sudáfrica para que revisara su política.

229. Algunos miembros opinaron que el examen de las comunicaciones de particulares estaba unido íntimamente a la cuestión de las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Afirmaron que la Subcomisión debía encontrar el medio de cumplir de manera concreta el cometido que le había confiado la Comisión de Derechos Humanos en virtud de su resolución 8 (XXIII), y facilitar a los particulares la oportunidad de señalar a la atención de los órganos competentes de las Naciones Unidas los casos en que sus derechos fueran violados. Dichos representantes recordaron que, en virtud de dicha resolución, se pedía a la Subcomisión que preparara un informe sobre la información relativa a violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales procedente de todas las fuentes disponibles. A juicio de estos miembros, las comunicaciones particulares eran uno de los conductos por medio de los cuales podía llamarse la atención de la Comisión sobre las violaciones de derechos y, por consiguiente, constituían una fuente de información válida. Se opinó también que al examinar la cuestión de las violaciones de

los derechos humanos y las libertades fundamentales, la Subcomisión no debía limitarse al estudio de las situaciones de carácter político como las del Africa meridional y el Oriente Medio puesto que dichas situaciones eran ya objeto de investigación por parte de otros órganos de las Naciones Unidas. La Subcomisión debía tener objetivos universales y considerar todos los casos de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales dondequiera que ocurriesen, siempre que revelaran un cuadro persistente de violaciones. Este era, a su juicio, el propósito del proyecto de resolución del Sr. Carey. Algunos miembros señalaron que durante mucho tiempo se había considerado carente de sentido el procedimiento sobre comunicaciones relativas a los derechos humanos. No se debían abandonar los considerables esfuerzos realizados durante los años anteriores por la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para resolver el problema. Se sostuvo que el proyecto de resolución E/CN.4/Sub.2/L.527 y Add.1/Rev.1 constituía una posibilidad encomiable y era indispensable para la observancia internacional de los derechos humanos. Se sostuvo también que las comunicaciones consignadas en el anexo al proyecto de resolución identificaban situaciones que revelaban un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos en el sentido de las disposiciones de la resolución 1235 (XLVI) del Consejo Económico y Social.

230. El Sr. Daoudy presentó el siguiente proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.537) a la consideración de la Subcomisión:

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Habiendo considerado los informes pertinentes sobre la cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales (tema 6 del programa),

"Habiendo oído las declaraciones que se hicieron sobre este punto ante la Comisión,

"Teniendo presente que según la Carta de las Naciones Unidas todos los Estados Miembros han contraído la obligación de tomar medidas conjunta y separadamente en colaboración con las Naciones Unidas para la realización de los propósitos expuestos en la Carta, entre los cuales están el desarrollo del respeto y observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

/...

"Teniendo presentes los principios formulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de toda persona a regresar a su su país, .

"Profundamente preocupada por los informes sobre la persistencia de violaciones de derechos humanos en el Africa meridional y en los territorios ocupados del Oriente Medio,

"Recordando los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y en particular el Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra,

"Recordando a) las resoluciones 2145 (XXI) del 27 de octubre de 1966 y 2248 (S-V) del 19 de mayo de 1967 de la Asamblea General, y b) la resolución 2252 (S-V) del 5 de julio de 1967 de la Asamblea General,

"Recordando además a) las resoluciones 3 del 11 de mayo de 1968, 4 del 11 de mayo de 1968, 6 del 11 de mayo de 1968, 8 del 11 de mayo de 1968, 14 del 12 de mayo de 1968 y 23 del 12 de mayo de 1968, y b) la resolución 1 del 7 de mayo de 1968, de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968,

"Recordando también a) las resoluciones 134 (1960) del 7 de abril de 1960, 245 (1968) y 246 (1968) del Consejo de Seguridad, y b) las resoluciones 237 (1967) del 14 de junio de 1967 y 259 (1968) del 27 de septiembre de 1968 del Consejo de Seguridad,

"Recordando en particular a) la resolución 5 (XXV) y b) las resoluciones 6 (XXIV) y 6 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos,

"Reafirma que a) la práctica del apartheid y b) la destrucción en masa de de hogares y bienes, que privan de sus derechos inalienables a grandes sectores de la población, y la expulsión en masa de sus hogares y tierras a habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio en contravención de los Convenios de Ginebra, son situaciones respecto de las cuales la Subcomisión tiene motivos razonables para creer que revelan un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

"Invita a la Comisión de Derechos Humanos a pedir al Secretario General que proporcione a la Subcomisión, en su próximo período de sesiones, a) un informe sobre las violaciones de derechos humanos en el Africa meridional y b) el informe del Grupo de Trabajo Especial de Expertos creado por la resolución 6 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos para investigar violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Oriente Medio."

/...

231. Algunos miembros de la Subcomisión se opusieron al proyecto de resolución, recalcando que en él sólo se señalaban dos zonas en el mundo donde se alegaba que se habían cometido violaciones graves, sugiriendo así que no se perpetraban violaciones graves en ninguna otra parte. Otros lo apoyaron, indicando que la Subcomisión debía contribuir a los esfuerzos emprendidos por otros órganos de las Naciones Unidas para obligar al Gobierno de Israel a garantizar la observancia de los derechos humanos en los territorios ocupados.

232. El representante del Secretario General señaló a la atención de la Subcomisión un documento sobre las consecuencias financieras (E/CN.4/Sub.2/L.531) relativas al proyecto de resolución presentado por el Sr. Carey.

233. Por falta de tiempo, los proyectos de resolución presentados por el Sr. Carey (E/CN.4/Sub.2/L.527 y Add.1/Rev.1) y por el Sr. Daoudy (E/CN.4/Sub.2/L.537) no se sometieron a votación. A propuesta del Presidente, se decidió transmitirlos a la Comisión de Derechos Humanos.

/...

VI. EXAMEN DE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN ESFERAS
DE QUE SE HA OCUPADO LA SUBCOMISION

(Tema 8 del programa)

234. En sus sesiones 558a. a 561a. la Subcomisión estudió el tema 8 de su programa.

235. La Subcomisión tuvo ante sí un memorando (E/CN.4/Sub.2/297) presentado por el Secretario General en que se pasaba revista a los acontecimientos ocurridos del 16 de junio de 1968 al 15 de junio de 1969, en relación con los siguientes asuntos: los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la situación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, medidas contra el nazismo y la intolerancia racial, coordinación de las actividades de las Naciones Unidas respecto de la política de apartheid y discriminación racial en Africa meridional, informes periódicos sobre los derechos humanos, y los informes y estudios anteriores de la Subcomisión.

236. La Subcomisión tuvo también ante sí un memorando (E/CN.4/Sub.2/298) presentado por la Oficina Internacional del Trabajo respecto de la discriminación en el empleo y ocupación. El memorando incluía información sobre los principales acontecimientos relativos a la discriminación en las esferas de competencia de la OIT desde la fecha del memorando anterior, presentado a la Subcomisión en su 21.º período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/293), hasta el 25 de mayo de 1969. El memorando trataba de la cuestión de la ratificación de convenios de la OIT relativos a la igualdad de oportunidades en materia de empleo y a la condición de ciertas categorías particulares de personas al igual que de la cuestión de la aplicación de dichos convenios. Describía también varias publicaciones recientes de la OIT sobre la igualdad de oportunidades en materia de empleo y de ocupación y examinaba sus programas de cooperación técnica destinados a asegurar la no discriminación en el empleo. Describía también los programas de la OIT relativos al apartheid en Sudáfrica.

237. La Subcomisión tuvo también ante sí un memorando (E/CN.4/Sub.2/299) presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en que se resumían las actividades recientes de la UNESCO en el terreno de

/...

la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y en las relaciones raciales, durante el período que va del 30 de septiembre de 1968 al 30 de mayo de 1969. En él se informaba a la Subcomisión de las medidas que se estaban tomando para poner en práctica la Convención y Recomendación relativas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza incluidos los informes presentados por los Estados Partes en la Convención y por otros Estados miembros sobre la aplicación de la Recomendación. En conexión con la cuestión de las relaciones raciales, el memorando describía las publicaciones que habían aparecido, o que aparecerían, sobre la eliminación de la discriminación racial. Se señalaban a la atención las resoluciones aprobadas por la 15a. Conferencia General de la UNESCO en octubre y noviembre de 1968, que abarcaban las labores de la UNESCO respecto de la eliminación del colonialismo y racismo.

238. Los representantes de la OIT y de la UNESCO formularon declaraciones complementarias de palabra (558a. sesión).

239. En el curso del debate general, muchos miembros manifestaron su satisfacción por las medidas que estaban tomando la OIT y la UNESCO para aplicar las disposiciones del Convenio de la OIT relativo a la discriminación (empleo y ocupación), de 1958 (No. 111) y la Convención y Recomendación de la UNESCO relativas a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de 1960. Algunos miembros estimaron, sin embargo, que la Subcomisión necesitaba más información sobre la aplicación de estos instrumentos, ya que era difícil evaluar su eficacia para eliminar la discriminación en el plano nacional. Estos miembros consideraban que el sistema incorporado en muchos convenios en materia de derechos humanos, consistente en informes presentados por los Estados Partes sobre las medidas tomadas por ellos para poner en práctica los convenios, era inadecuado y que podría asegurarse una aplicación más plena mediante órganos independientes que recibiesen tal información y gozasen de amplios poderes de investigación y conciliación.

240. La Subcomisión acogió con beneplácito la entrada en vigor el 4 de enero de 1969 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y las medidas tomadas para establecer, según lo dispuesto por la Convención, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Se insistió en que el mayor número posible de Estados debían ser partes en ella. Se hizo mención de los artículos 17 y 18 de la Convención que disponen que todos los

/...

Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado, así como todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueden ser partes en la Convención. Algunos miembros opinaron que, conforme al artículo 17 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, todos los Estados debían estar calificados para ser partes en la Convención. Se subrayó que la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial constituía un elemento positivo. En cambio, se opinó que la elección de un representante de uno de los Estados alemanes de la República Federal de Alemania como miembro del Comité, mientras que el otro Estado alemán - la República Democrática Alemana - estaba artificialmente privado de la posibilidad de participar en la Convención creaba una situación gravemente perjudicial para ésta y para los trabajos del propio Comité. Se subrayó, por otra parte, que el hecho de que el Gobierno alemán estuviera representado en el Comité debería constituir una garantía de protección contra todo resurgimiento en dicho país de una discriminación racial comparable a la de la época nazi.

241. Se hizo mención de la propuesta (resolución 2446 (XXIII) de la Asamblea General de 19 de diciembre de 1968) relativa a la celebración en 1971 del Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, que será examinada por la Asamblea General en su vigésimo cuarto período de sesiones. Se consideró que, en caso de aprobarse, tal propuesta proporcionaría una oportunidad para renovar los esfuerzos en la lucha contra el apartheid, el nazismo y el neonazismo.

242. Durante los debates sobre los estudios de la Subcomisión que no han sido examinados todavía por la Comisión de Derechos Humanos, a saber, el estudio de la discriminación en materia de derechos políticos, el estudio sobre la discriminación en materia del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, y el estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera del matrimonio, se hizo mención de la resolución 19 (XXV) de la Comisión, de 18 de marzo de 1969; esta resolución, entre otras cosas, fijó un calendario para el examen de los estudios por parte de la Comisión. Algunos miembros señalaron que, según el calendario de la Comisión, algunos estudios serían examinados diez o más años después de su terminación y que parte de la información, al igual que ciertas conclusiones y recomendaciones de estos estudios, podrían resultar anticuadas.

/...

243. Acerca de los informes periódicos sobre los derechos humanos, se informó a la Subcomisión de que, de conformidad con su solicitud incluida en la resolución 1 (XXI) del 9 de octubre de 1968, el Secretario General había incluido en su esquema de epígrafes enviado a los gobiernos para que contribuyesen a los informes periódicos, los asuntos de que se había ocupado la Subcomisión. Algunos miembros manifestaron su decepción porque la Comisión y su Comité Especial de Informes Periódicos en materia de derechos humanos no habían tomado medidas respecto de la recomendación hecha en la misma resolución en el sentido de que el Secretario General preparase para cada período de sesiones de la Subcomisión un resumen de las partes de los informes periódicos relacionadas con cuestiones comprendidas en las atribuciones de la Subcomisión; sugirieron que se pidiese a la Comisión que volviese a considerar su decisión.

244. En la 559a. sesión, el Sr. Capotorti y el Sr. Juvigny presentaron un proyecto de resolución (E/CN.4/Sub.2/L.513) que decía lo siguiente:

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Habiendo recibido la nota presentada por el Secretario General sobre los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/297), el memorando presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre sus actividades recientes y en el terreno de la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y en las relaciones raciales (E/CN.4/Sub.2/299), y el memorando presentado por la Oficina Internacional del Trabajo sobre la evolución de la situación en las esferas de competencia de la OIT (E/CN.4/Sub.2/298),

"Tomando nota de la resolución 19 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual la Comisión decidió proseguir y concluir, en su 26^o período de sesiones, la discusión y el examen del estudio de la discriminación en materia de derechos políticos y del proyecto de principios relativos a la libertad y la no discriminación en materia de derechos políticos; y examinar, con carácter prioritario, en su 27^o período de sesiones, el estudio sobre la discriminación en materia del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, y, en su 28^o período de sesiones, al estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera del matrimonio,

"Tomando nota asimismo de la resolución 22 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se pidió al Secretario General, entre otras cosas, que incluyera en su esquema de los epígrafes para la presentación de informes periódicos sobre los derechos humanos, los asuntos de que se ha ocupado la Subcomisión,

/...

"1. Toma nota de los memorandos presentados por el Secretario General, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, cuyo contenido demuestra los continuos progresos realizados en la acción internacional para la protección de los derechos humanos;

"2. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y por que haya sido elegido el Comité de Discriminación Racial que iniciará pronto su labor;

"3. Expresa la esperanza de que todos los Estados que han firmado los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificarán estos instrumentos lo antes posible y que otros Estados firmarán, ratificarán o adherirán a ellos, para que estos instrumentos básicos para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales entren en vigor sin más demora;

"4. Señala a la atención de la Comisión de Derechos Humanos la importancia de terminar su labor relativa a los estudios ya realizados por la Subcomisión lo antes posible, para que las medidas recomendadas en ellos puedan ser estudiadas y aprobadas antes de que la información en que se basan resulte anticuada;

"5. Reitera su recomendación anterior en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos pida al Secretario General que prepare, para cada período de sesiones de la Subcomisión, un resumen de las partes de los informes periódicos que se relacionen con cuestiones comprendidas en las atribuciones de la Subcomisión, especialmente de las que ésta ya se ha ocupado."

245. Al hacer observaciones sobre el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, algunos miembros señalaron que sería útil que la Comisión de Derechos Humanos dispusiese de información actualizada cuando examinase los estudios preparados por la Subcomisión. Opinaron que era importante determinar si habían surgido nuevos acontecimientos o tendencias después de la publicación de los estudios en las esferas por ellos abarcadas; la nueva información podría afectar las conclusiones y recomendaciones hechas por los Relatores Especiales en sus estudios. Estos miembros estimaron que el texto presentado por los patrocinadores en el párrafo 4 de la parte dispositiva no hacía más que reiterar la decisión tomada ya por la Comisión de terminar su labor relativa a los estudios. Sugirieron que se pidiese a los Estados Miembros que proporcionasen información sobre los

/...

nuevos acontecimientos que hubiesen ocurrido después de la conclusión de los estudios. Algunos miembros se opusieron a esta propuesta porque consideraban que podría postergar el examen de los estudios. Estos miembros estimaron que no debía solicitarse a los gobiernos que suministrasen información adicional sobre asuntos que ya habían sido examinados.

246. En la 559a. sesión el Sr. Humphrey presentó una enmienda (E/CN.4/Sub.2/L.514) al proyecto de resolución, que decía lo siguiente:

"Después del párrafo 4 del proyecto de resolución agréguese el texto siguiente:

"4a. Pide al Secretario General que recabe de los gobiernos de los Estados Miembros información sobre nuevos acontecimientos ocurridos en esferas abarcadas por los estudios realizados ya por la Subcomisión y que no han sido examinados todavía por la Comisión de Derechos Humanos, y que presente la información pertinente a la Comisión en el período de sesiones en el que se haya de examinar un determinado estudio;"

247. Se señaló que, a fin de que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial lograra los propósitos que en ella se establecen, era de importancia que se adhiriese a ella el mayor número posible de Estados; y se sugirió que se enmendase en tal sentido el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Algunos miembros se opusieron a la inclusión de las palabras que siguen en el párrafo 3 de la parte dispositiva: "y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". A su juicio, el Protocolo se ocupaba de cuestiones de procedimiento y constituía un instrumento separado e independiente de los Pactos de Derechos Humanos. Además, la expresión "facultativo", según se empleaba en el Protocolo, significaba que cada gobierno quedaba en libertad para decidir si había de adherirse al Protocolo. Varios miembros se opusieron a este punto de vista, expresando la opinión de que, tanto en el caso de los dos Pactos como en el del Protocolo, los Estados eran libres de adoptar la decisión que estimasen más conveniente. Declararon que la expresión "facultativo" sólo indicaba que el Protocolo era un instrumento separado del Pacto. A su juicio, hablar de los Pactos sin mencionar al Protocolo entrañaría una discriminación entre los instrumentos.

/...

248. Se declaró que era preciso que se informase a la Subcomisión respecto del programa de actividades para el Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial en 1971, a fin de que pudiese considerar la cuestión de su participación en las medidas que habrían de adoptarse en relación con el Año. A este respecto, se recordó a la Subcomisión que la Asamblea General examinaría propuestas relativas al programa para el Año en su próximo período de sesiones, es decir, el vigésimo cuarto.

249. En la 560a. sesión, el Sr. Rybakov presentó las siguientes enmiendas (E/CN.4/Sub.2/L.515) al proyecto de resolución:

"1. Al final del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución añádase el texto siguiente:

"y estima que a fin de realizar lo más rápidamente posible los objetivos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, es importante que el mayor número posible de Estados participen en ella."

"2. En el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, suprimanse las palabras: "y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

"3. Después del párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, insértese el nuevo párrafo siguiente:

"4. Pide al Secretario General que presente a la Subcomisión, en su 23. período de sesiones, un programa de actividades para el Año Internacional de la Lucha Contra el Racismo en 1971, teniendo presente que la Subcomisión podría, dentro del marco de ese programa, examinar la cuestión de su participación en las medidas apropiadas concernientes al Año Internacional de la Lucha Contra el Racismo."

"4. Cámbiese en consecuencia la numeración de los párrafos siguientes."

250. Posteriormente, retiró su tercera enmienda.

251. Se hizo notar que en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se hacía referencia a la resolución 19 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, y, en particular, al estudio sobre la discriminación en materia del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Se sugirió que también se hiciese referencia a la resolución 6 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos relativa al derecho de los habitantes que han salido de sus territorios a regresar a ellos.

/...

252. En la 560a. sesión, el Sr. Daoudy propuso la siguiente enmienda (E/CN.4/Sub.2 L.516) al proyecto de resolución:

"Al principio del segundo párrafo del preámbulo, reemplácense las palabras "Tomando nota" de la resolución 19 (XXV)" por el siguiente texto:

"Tomando nota de las siguientes resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos; a) la resolución 6 (XXV) por la que la Comisión reafirma el derecho inalienable de todos los habitantes que han salido de sus territorios desde el comienzo de las hostilidades en el Oriente Medio a regresar a ellos y la decisión de la misma Comisión de incluir esa cuestión en el programa de su 26º período de sesiones; b) la resolución 19 (XXV) ...".

253. El Sr. Jankovic, formulando observaciones sobre el párrafo 3 de la parte dispositiva, sugirió verbalmente que las palabras "Expresa la esperanza" fuesen sustituidas por "Pide".

254. El Sr. Humphrey señaló que el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución constituía en realidad un llamamiento a la Comisión para que reconsiderase una decisión ya adoptada. A su juicio, la Subcomisión estaba facultada para pedir al Secretario General que preparase un resumen de algunas partes pertinentes de los informes periódicos sobre derechos humanos. Los copatrocinadores del proyecto de resolución aceptaron su sugerencia de suprimir, en el párrafo 5 de la parte dispositiva, las palabras "Reitera su recomendación anterior de que la Comisión de Derechos Humanos ...".

255. El Sr. Calvocoressi hizo notar que aún no había sido elegido el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, puesto que hasta la fecha sólo se habían elegido a diecisiete de las dieciocho personas que debían integrar dicho órgano. Sugirió que la palabra "elegido" se sustituyese por "constituido", sugerencia que aceptaron los copatrocinadores.

256. Los copatrocinadores del proyecto de resolución presentaron un texto revisado (E/CN.4/Sub.2/L.513/Rev.1), en que se tenían en cuenta algunas de las propuestas formuladas por diversos miembros de la Subcomisión; dicho texto revisado se reproduce a continuación:

/...

"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

"Habiendo recibido la nota presentada por el Secretario General sobre los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/297), el memorando presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre sus actividades recientes en el terreno de la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y en las relaciones raciales (E/CN.4/Sub.2/299), y el memorando presentado por la Oficina Internacional del Trabajo sobre la evolución de la situación en las esferas de competencia de la OIT (E/CN.4/Sub.2/298),

"Tomando nota de la resolución 19 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual la Comisión decidió proseguir y concluir, en su 26.º período de sesiones, la discusión y el examen del estudio de la discriminación en materia de derechos políticos y del proyecto de principios relativos a la libertad y la no discriminación en materia de derechos políticos, y examinar con carácter prioritario en su 27.º período de sesiones, el estudio sobre la discriminación en materia del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, y, en su 28.º período de sesiones, el estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera del matrimonio,

"Tomando nota asimismo de la resolución 22 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se pidió al Secretario General, entre otras cosas, que incluyera en su esquema de los epígrafes para la presentación de informes periódicos sobre los derechos humanos, los asuntos de que se ha ocupado la Subcomisión,

"1. Toma nota de los memorandos presentados por el Secretario General, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, cuyo tenor demuestra los continuos progresos realizados en la acción internacional para la protección de los derechos humanos;

"2. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y porque haya sido constituido el Comité de Discriminación Racial, que iniciará pronto su labor, y estima que, para alcanzar lo más rápidamente posible los objetivos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Raciales, importante que participen en ella y la pongan efectivamente en vigor el mayor número posible de Estados;

"3. Pide a todos los Estados que han firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratifiquen esos instrumentos lo antes posible y, a los demás Estados, que los firmen y ratifiquen o se adhieran a ellos para que esos instrumentos fundamentales de la protección de los derechos humanos

/...

y de las libertades fundamentales entren en vigor sin más tardanza, y expresa la esperanza de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre en vigor a la mayor brevedad posible;

"4. Señala a la atención de la Comisión de Derechos Humanos la importancia de terminar su labor relativa a los estudios ya realizados por la Subcomisión lo antes posible, para que las medidas recomendadas en ellos puedan ser estudiadas y aprobadas; en todo o en parte, antes de que la información en que se basan resulte anticuada;

"5. Pide al Secretario General que prepare, para cada período de sesiones de la Subcomisión, un resumen de las partes de los informes periódicos que se relacionen con cuestiones comprendidas en las atribuciones de la Subcomisión, especialmente de las que ésta ya se ha ocupado."

257. El Sr. Inglés señaló que debía corregirse el segundo párrafo de la parte dispositiva del texto revisado para que dijese "Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial". El Sr. Carey sugirió que, en la versión inglesa del mismo párrafo, la palabra "practical" se sustituyese por "full". Los copatrocinadores aceptaron estas enmiendas. El Sr. Rybakov retiró sus enmiendas primera y segunda.

Aprobación de la resolución

258. En su 561a. sesión, la Subcomisión votó sobre el proyecto de resolución revisado (E/CN.4/Sub.2/L.513/Rev.1) presentado por los Sres. Capotorti y Juvigny, tal como había sido revisado oralmente, y las enmiendas presentadas por el Sr. Humphrey (E/CN.4/Sub.2/L.514) y por el Sr. Daoudy (E/CN.4/Sub.2/L.516). A petición del Sr. Daoudy se procedió a votación nominal sobre su enmienda al segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. A petición del Sr. Humphrey, el tercer párrafo de la parte dispositiva fue objeto de votación separada. El resultado de la votación fue el siguiente:

a) El primer párrafo del preámbulo quedó aprobado por unanimidad.

b) La enmienda presentada por el Sr. Daoudy (E/CN.4/Sub.2/L.516) quedó rechazada por 9 votos contra 8 y 6 abstenciones:

Votos a favor: Sr. Jankovic, Sr. Kettani, Sr. Khalifa, Sr. Rahman,
Sr. Rybakov, Sr. Bolintineanu, Sr. Daoudy, Sr. Inglés.

Votos en contra: Sr. Juvigny, Sr. Martínez Báez, Sr. Nettel, Sr. Ruhashyankiko,
Sr. Calvocoressi, Sr. Capotorti, Sr. Carey, Sr. Gros Espiell,
Sr. Humphrey.

Abstenciones: Sr. Martínez Cobo, Sr. Nikiema, Sr. Abu Rannat, Sr. Díaz
Samayoa, Sr. Durlong, Srta. Gichuru.

/...

- c) El segundo párrafo del preámbulo quedó aprobado por 21 votos contra ninguno y 4 abstenciones.
 - d) El tercer párrafo del preámbulo quedó aprobado por unanimidad.
 - e) Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva quedaron aprobados por 22 votos contra ninguno y una abstención.
 - f) El párrafo 3 de la parte dispositiva quedó aprobado por 20 votos contra 2 y una abstención.
 - g) El párrafo 4 de la parte dispositiva quedó aprobado por unanimidad.
 - h) La enmienda del Sr. Humphrey (E/CN.4/Sub.2/L.514) quedó aprobada por 15 votos contra 3 y 5 abstenciones.
 - i) El quinto párrafo de la parte dispositiva quedó aprobado por unanimidad.
 - j) El proyecto de resolución en su totalidad, en su forma enmendada, quedó aprobado por 21 votos contra ninguno y dos abstenciones.
259. El texto de la resolución 1 (XXII), tal como quedó aprobada por la Subcomisión en su 561a. sesión celebrada el 28 de agosto de 1969, dice lo siguiente:

Resolución 1 (XXII)

EXAMEN DE LOS NUEVOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS
EN ESFERAS DE QUE SE HA OCUPADO LA SUBCOMISION

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Habiendo recibido la nota presentada por el Secretario General sobre los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/297), el memorando presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre sus actividades recientes en el terreno de la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y en las relaciones raciales (E/CN.4/Sub.2/299), y el memorando presentado por la Oficina Internacional del Trabajo sobre la evolución de la situación en las esferas de competencia de la OIT (E/CN.4/Sub.2/298),

Tomando nota de la resolución 19 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual la Comisión decidió proseguir y concluir, en su 26.º período de sesiones, la discusión y el examen del estudio de la discriminación en materia de derechos políticos y del proyecto de principios relativos a la libertad y la no discriminación en materia de derechos políticos, y examinar con carácter prioritario, en su 27.º período de sesiones, el estudio sobre la discriminación en materia del

/...

derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, y, en su 28.^o período de sesiones, el estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera del matrimonio,

Tomando nota asimismo, de la resolución 22 (XXV) de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se pidió al Secretario General, entre otras cosas, que incluyera en su esquema de los epígrafes para la presentación de informes periódicos sobre los derechos humanos, los asuntos de que se ha ocupado la Subcomisión,

1. Toma nota de los memorandos presentados por el Secretario General, el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, cuyo tenor demuestra los continuos progresos realizados en la acción internacional para la protección de los derechos humanos;

2. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y por que haya sido constituido el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que iniciará pronto su labor, y estima que, para alcanzar lo más rápidamente posible los objetivos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Raciales, es importante que participen en ella y la pongan efectivamente en vigor el mayor número posible de Estados;

3. Pide a todos los Estados que han firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratifiquen esos instrumentos lo antes posible y, a los demás Estados, que los firmen y ratifiquen o se adhieran a ellos para que esos instrumentos fundamentales de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales entren en vigor sin más tardanza, y expresa la esperanza de que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre en vigor a la mayor brevedad posible;

4. Señala a la atención de la Comisión de Derechos Humanos la importancia de terminar su labor relativa a los estudios ya realizados por la Subcomisión lo antes posible, para que las medidas recomendadas en ellos puedan ser estudiadas y aprobadas, en todo o en parte, antes de que la información en que se basan resulte anticuada;

5. Pide al Secretario General que recabe de los gobiernos de los Estados Miembros información sobre nuevos acontecimientos ocurridos en esferas abarcadas por los estudios realizados ya por la Subcomisión y que no han sido examinados todavía por la Comisión de Derechos Humanos, y que presente la información pertinente a la Comisión en el período de sesiones en el que se haya de examinar un determinado estudio;

6. Pide al Secretario General que prepare, para cada período de sesiones de la Subcomisión, un resumen de las partes de los informes periódicos que se relacionen con cuestiones comprendidas en las atribuciones de la Subcomisión especialmente de las que ésta ya se ha ocupado.

/...

VII. APROBACION DEL INFORME DE LA SUBCOMISION
A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

(Tema 12 del programa)

260. La Subcomisión examinó el proyecto de informe sobre su 22.^o período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/L.519 y Add.1 a 7) en sus sesiones 580a. y 581a., celebradas el 12 de septiembre de 1969, y lo aprobó por unanimidad en su forma enmendada.

/...

VIII. PROYECTO DE RESOLUCION CUYA APROBACION SE RECOMIENDA
A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS

Estudio de la igualdad en la administración de justicia

La Comisión de Derechos Humanos,

Vista la resolución 3 (XXII) de la Subcomisión de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

Recomienda al Consejo Económico y Social la aprobación del proyecto de resolución siguiente:

"El Consejo Económico y Social,

"Vista la resolución ... (XXVI) de la Comisión de Derechos Humanos,

"Teniendo en cuenta la contribución singular hecha por el estudio de la igualdad en la administración de justicia (E/CN.4/Sub.2/296) presentado a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su 22.^o período de sesiones por su Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat,

"1. Expresa su agradecimiento al Sr. Abu Rannat por su valioso estudio;

"2. Pide al Secretario General que haga imprimir el estudio del Relator Especial y le dé la distribución más amplia posible;

"3. Pide al Secretario General que adopte medidas para que el Sr. Abu Rannat asista a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando ésta examine su informe."

/...

Anexo I

CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA
SUBCOMISION EN SU 22.º PERIODO DE SESIONES

1. En su 22.º período de sesiones la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías aprobó cuatro resoluciones, de las que tres tienen consecuencias financieras. Antes de que se aprobaran esas resoluciones, el Secretario General presentó los cálculos de sus consecuencias financieras, de conformidad con el párrafo 13.1 del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas y el artículo 28 del Reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social. En algunos casos, los proyectos de resolución sobre cuya base se presentaron los cálculos fueron enmendados antes de ser aprobados. Estas enmiendas no afectaron a los cálculos presentados a la Subcomisión.
2. Si las decisiones que tomen la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social respecto de las propuestas de la Subcomisión obligaran al Secretario General a contraer obligaciones en 1970, el Secretario General tendría que solicitar el consentimiento previo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) para sufragar esos gastos. Hecho esto, las solicitudes de créditos adicionales serían incluidas, según corresponda, en el proyecto de presupuesto suplementario para 1970 que el Secretario General someterá a la Asamblea General en su vigésimo quinto período de sesiones.

Resolución 2 (XXII). Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural

3. En el párrafo 6 de esta resolución, la Subcomisión pide "al Relator Especial que siga trabajando en su tarea, teniendo en cuenta el intercambio de opiniones sobre el informe que ha tenido lugar durante el 22.º período de sesiones de la Subcomisión, y que prepare y presente un informe definitivo a tiempo para que la Subcomisión lo considere con prioridad en su 23.º período de sesiones".
4. En el párrafo 5, entre otras cosas, se "pide nuevamente al Secretario General que preste al Relator Especial toda la ayuda necesaria para que termine su informe".
5. El Relator Especial señaló que la preparación de su informe final le obligaría a realizar dos visitas a la Sede con anterioridad a junio de 1970, a fin de completar las consultas sobre el contenido del informe que habrá de presentarse a la Subcomisión en su 23.º período de sesiones de agosto-septiembre de 1970. Como

/...

el Relator Especial es también miembro de la Subcomisión, la presentación de su informe final en el 23.^o período de sesiones no entrañaría gastos adicionales.

6. Los gastos de viaje (primera clase) y dietas para los dos períodos de una semana a los precios actuales serían del orden de los 2.400 dólares. A este respecto, el Secretario General señaló a la atención de la Subcomisión el párrafo 10 de la resolución 1367 (XLV) del Consejo Económico y Social, en el que éste "recuerda... a las comisiones orgánicas y a los demás órganos auxiliares del Consejo que sus mandatos exigen que el Consejo examine, antes de su aplicación, todas las propuestas relativas a los programas de trabajo de dichas comisiones y órganos". En consecuencia, los fondos para sufragar las dos visitas a la Sede no estarían disponibles hasta que el Consejo hubiera aprobado la propuesta que figura en el proyecto de resolución, lo cual no podría ocurrir hasta que ese órgano reanudara su 48.^o período de sesiones en mayo de 1970.

Resolución 3 (XXII). Estudio de la igualdad en la administración de justicia

7. En el párrafo 6 de la resolución 3 (XXII) la Subcomisión pide a la Comisión de Derechos Humanos que recomiende al Consejo Económico y Social que éste:

a) pida al Secretario General que haga imprimir el estudio del Relator Especial y le dé la distribución más amplia posible; y b) pida al Secretario General que adopte medidas para que el Sr. Abu Rannat asista a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando ésta examine su informe.

8. En cuanto a la impresión y distribución del estudio del Relator Especial, el costo estimado de esta publicación, cuyo texto no excedería de 275 páginas manuscritas de tamaño corriente en tres idiomas (español, francés e inglés), con una tirada total de 3.400 ejemplares como máximo para los tres idiomas, sería de 8.500 dólares aproximadamente.

9. Respecto de los arreglos para que el Relator Especial asista a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos cuando ésta examine su informe, los gastos de viaje (primera clase) y dietas para una semana serían a los precios actuales del orden de los 1.800 dólares.

10. Por tanto, el costo total que entraña la resolución 3 (XXII) se estima en 10.300 dólares.

/...

Resolución 4 (XXII). Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadora del apartheid y del colonialismo

11. En el párrafo 5 de la resolución 4 (XXII) se pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias para que el Relator Especial sobre esclavitud "celebre consultas con las autoridades pertinentes de la Comisión de Estupefacientes, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras organizaciones internacionales y regionales competentes, con miras a obtener la información que requiera la preparación de su estudio y colaboración de otro tipo para eliminar los abusos que se están examinando". En el párrafo 1 de la resolución se pide también al Relator Especial que presente un informe sobre la marcha de sus trabajos a la Subcomisión en su 23.^o período de sesiones (1970).

12. En relación con las consultas previstas en el párrafo 5 de la resolución, se señalan a la atención de la Subcomisión las consecuencias financieras que se expusieron cuando examinó la resolución 7 (XXI), ocasión en que la parte de los trabajos del Relator Especial correspondiente a 1970 se detalló de la siguiente manera: "La preparación del informe en 1970 entrañará un viaje del Relator Especial a la sede de los diversos organismos especializados competentes, de las organizaciones regionales intergubernamentales y no gubernamentales, así como a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y una estancia de aproximadamente dos semanas para trabajar con la Secretaría. Se calcula que los gastos de viaje de ida y vuelta y de las dietas del Relator Especial se elevarán a 2.200 dólares".^{a/}

13. A raíz de la aprobación de la resolución 12 (XXV) sobre el mismo tema por la Comisión de Derechos Humanos, estas consecuencias financieras fueron sometidas nuevamente al Consejo Económico y Social en su 46.^o período de sesiones, con los ajustes correspondientes para tener en cuenta costos mayores, ya que el Relator Especial no era miembro de la Subcomisión. La suma prevista para 1970 era del orden de 2.900 dólares, que incluían tanto los gastos de viaje relacionados con la preparación del informe del Relator Especial como la presentación de su informe sobre la marcha de los trabajos a la Subcomisión en el 23.^o período de sesiones

^{a/} Véase E/CN.4/976, anexo I, págs. 6 y 7.

que, según se preveía entonces, se celebraría en Ginebra^{b/}. Como quiera que en el calendario de conferencias y reuniones para 1970 aprobado por el Consejo en su 1657a. sesión se indica que el 23.^o período de sesiones de la Subcomisión se celebrará en Nueva York, los gastos de viaje de ida y vuelta El Cairo/Nueva York (primera clase) y dietas para una semana, aproximadamente, correspondientes a la presentación del informe del Relator Especial sobre la marcha de los trabajos serán ahora de unos 1.600 dólares. En consecuencia, puede calcularse que los gastos totales de los trabajos en 1970 del Relator Especial sobre esclavitud serán de 3.800 dólares y, como se indicó cuando el Consejo examinó el tema^{c/}, el Secretario General se propone solicitar, en su proyecto de presupuesto revisado para 1970, que la Asamblea General consigne en su vigésimo cuarto período de sesiones los créditos adicionales necesarios para este fin.

^{b/} Véase E/4621/Add.1, pág. 19.

^{c/} Ibid., párr. 5.

Anexo II

LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA SUBCOMISION EN SU
22.º PERIODO DE SESIONES

1. Documentos de distribución general

- | | |
|--|--|
| E/CN.2/Sub.2/295 | Programa provisional con anotaciones: nota del Secretario General. |
| E/CN.4/Sub.2/296 | Estudio de la igualdad en la administración de justicia: informe presentado por el Relator Especial, Sr. Mohammed Ahmed Abu Rannat. |
| E/CN.4/Sub.2/297 | Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión: nota del Secretario General. |
| E/CN.4/Sub.2/298 | Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión: memorando presentado por la Oficina Internacional del Trabajo. |
| E/CN.4/Sub.2/299 | Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión: memorando presentado por la UNESCO. |
| E/CN.4/Sub.2/300 and
Corr.1 and Add.1-3 | Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del <u>apartheid</u> y del colonialismo: nota del Secretario General. |
| E/CN.4/Sub.2/301 | Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural: informe provisional presentado por el Relator Especial, Sr. Hernán Santa Cruz. |
| E/CN.4/Sub.2/302 | Genocidio - Situación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio: nota del Secretario General. |
| E/CN.4/Sub.2/303
and Add.1-6 | Genocidio: nota del Secretario General. |
| E/CN.4/Sub.2/304 | Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del <u>apartheid</u> y del colonialismo: informe preliminar presentado por el Relator Especial, Sr. Mohammed Awad. |
| E/CN.4/Sub.2/CR.14 | Lista no confidencial de comunicaciones referentes a la discriminación y a las minorías. |

/...

2. Documentos de distribución limitada

- E/CN.4/Sub.2/L.512 Aprobación del programa.
- E/CN.4/Sub.2/L.513 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión - proyecto de resolución del Sr. Capotorti y del Sr. Juvigny.
- E/CN.4/Sub.2/L.513/Rev.1 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión.
- E/CN.4/Sub.2/514 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión - Sr. Humphrey: enmienda al proyecto de resolución propuesto por el Sr. Capotorti y el Sr. Juvigny (E/CN.4/Sub.2/L.513).
- E/CN.4/Sub.2/L.515 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión - Sr. Rybakov: enmiendas al proyecto de resolución presentado por el Sr. Capotorti y el Sr. Juvigny (E/CN.4/Sub.2/L.513).
- E/CN.4/Sub.2/L.516 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión - Sr. Daoudy: enmienda al proyecto de resolución presentado por el Sr. Capotorti y el Sr. Juvigny (E/CN.4/Sub.2/L.513).
- E/CN.4/Sub.2/L.517 Examen de nuevos acontecimientos ocurridos en esferas de que se ha ocupado la Subcomisión - resolución aprobada por la Subcomisión en su 56^a. sesión, celebrada el 28 de agosto de 1969.
- E/CN.4/Sub.2/L.518 Estudio de la igualdad en la administración de justicia - Sr. Capotorti, Sr. Carey y Sr. Nettel: proyecto de resolución.
- E/CN.4/Sub.2/L.519
and Add.1-7 Proyecto de informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías a la Comisión de Derechos Humanos sobre su 22.^o período de sesiones - Relator: Sr. Antonio Martínez Báez.
- E/CN.4/Sub.2/L.520 Estudio de la igualdad en la administración de justicia - exposición del Secretario General sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución que aparece en el documento E/CN.4/Sub.2/L.518.
- E/CN.4/Sub.2/L.521 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - informe provisional presentado por el Relator Especial, Sr. Hernán Santa Cruz.

/...

- E/CN.4/Sub.2/L.522 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - exposición del Secretario General sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/L.521.
- E/CN.4/Sub.2/L.523 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - Y.M. Rybakov: enmiendas al proyecto de resolución presentado por el Sr. Calvocoressi, el Sr. Martínez Báez y el Sr. Waldron-Ramsey (E/CN.4/Sub.2/L.521).
- E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - Y.M. Rybakov: enmiendas revisadas al proyecto de resolución presentado por el Sr. Calvocoressi, el Sr. Martínez Báez y el Sr. Waldron-Ramsey (E/CN.4/Sub.2/L.521).
- E/CN.4/Sub.2/L.524 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - Sr. Khalifa: enmienda a las enmiendas del Sr. Rybakov (E/CN.4/Sub.2/L.523/Rev.1) al proyecto de resolución presentado por el Sr. Calvocoressi, el Sr. Martínez Báez y el Sr. Waldron-Ramsey (E/CN.4/Sub.2/L.521).
- E/CN.4/Sub.2/L.525 Estudio especial de la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural - resolución aprobada por la Subcomisión en su 572a. sesión, celebrada el 5 de septiembre de 1969.
- E/CN.4/Sub.2/L.526 Estudio de la igualdad en la administración de justicia - Sr. Y.M. Rybakov: enmiendas al proyecto de resolución del Sr. Capotorti, el Sr. Carey y el Sr. Nettel (E/CN.4/Sub.2/L.518).
- E/CN.4/Sub.2/L.527 Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes - Sr. Carey: proyecto de resolución.
- E/CN.4/Sub.2/L.527/Add.1 Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes - Sr. Carey: proyecto de resolución (adición).

/...

- E/CN.4/Sub.2/L.527/
Add.1/Rev.1 Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes - Sr. Carey: revisión de la adición al documento E/CN.4/Sub.2/L.527.
- E/CN.4/Sub.2/L.528 y
Corr.1 La igualdad en la administración de justicia - Revisión del proyecto de principios sobre la Igualdad en la Administración de Justicia.
- E/CN.4/Sub.2/L.529 Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo - proyecto de resolución del Sr. Calvocoressi, el Sr. Capotorti, el Sr. Carey, el Sr. Gros Espiell, el Sr. Juvigny, el Sr. Martínez Cobo y el Sr. Ruhashyankiko.
- E/CN.4/Sub.2/L.529/
Rev.1 Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo - proyecto de resolución del Sr. Calvocoressi, el Sr. Capotorti, el Sr. Carey, el Sr. Durlong, el Sr. Gross Espiell, el Sr. Juvigny, el Sr. Martínez Cobo y el Sr. Ruhashyankiko.
- E/CN.4/Sub.2/L.530 Examen de la labor futura de la Subcomisión - nota del Secretario General.
- E/CN.4/Sub.2/L.531 Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes - exposición del Secretario General sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/L.527.
- E/CN.4/Sub.2/L.532 Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo - Sr. Waldron-Ramsey: enmienda al proyecto de resolución presentado por el Sr. Calvocoressi, el Sr. Capotorti, el Sr. Carey, el Sr. Gros Espiell, el Sr. Juvigny, el Sr. Martínez Cobo y el Sr. Ruhashyankiko (E/CN.4/Sub.2/L.529).

/...

- E/CN.4/Sub.2/L.533 Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo - exposición del Secretario General sobre las consecuencias financieras del proyecto de resolución que figura en el documento E/CN.4/Sub.2/L.529/Rev.1.
- E/CN.4/Sub.2/L.534 Protección a las minorías - proyecto de resolución del Sr. Kettani, el Sr. Khalifa y el Sr. Waldron-Ramsey.
- E/CN.4/Sub.2/L.535 Protección a las minorías - proyecto de resolución del Sr. Díaz-Samayoa y el Sr. Gros Espiell.
- E/CN.4/Sub.2/L.536 Comunicaciones relativas a los derechos humanos - proyecto de resolución del Sr. Y.M. Rybakov.
- E/CN.4/Sub.2/L.537 Cuestión de la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso las políticas de discriminación racial y segregación y de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes - Sr. Daoudy: proyecto de resolución.
